REPUBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL

JUZGADO SÉPTIMO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ -
SECCIÓN SEGUNDA

AUTO DE SUSTANCIACIÓN No. 962

Septiembre dieciséis (16) de dos mil veintiuno (2021)

REFERENCIA: Exp. EJECUTIVO No. 11001-3335-007-2015-00504-00
EJECUTANTE: CRISTÓBAL JOSÉ MONSALVE CORTÉS
EJECUTADO: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL
Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN
SOCIAL UGPP

Revisado el expediente, el Despacho observa que:

Mediante auto de 7 de mayo de 2021, se modificó la liquidación del crédito presentada por la parte ejecutante y a su turno, se aprobó la elaborada por el despacho y se conminó a las partes a dar cumplimiento a la providencia en mención (fls. 255-257).

El 13 de mayo de 2021, la parte ejecutada presentó recurso de apelación contra la providencia del 7 de mayo de 2021 (fls. 258-261).

El 21 de julio de 2021, la parte ejecutada allegó la Resolución RDP 014905 de 16 de junio de 2021 “Por la cual se da cumplimiento a la providencia proferida por el Juzgado Séptimo Contencioso administrativo de Oralidad del Circuito de Bogotá D.C. Sección Segunda” (Fls. 262-266 y 267-271).

El 19 de agosto de 2021, la parte ejecutante, en atención al traslado del recurso de apelación interpuesto por la ejecutada, se pronuncia frente al mismo, solicitando entre otros asuntos, que se rechace de plano al considerar que es improcedente (fls. 272-275).

Se procede entonces a resolver sobre la concesión del recurso ordinario de apelación interpuesto por el apoderado de la ejecutante, contra el auto de 7 de mayo de 2021.

Sobre el particular, el artículo 306 de la Ley 1437 de 2011, establece:

“Artículo 306. Aspectos no regulados. En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo”

En razón a que el procedimiento del proceso ejecutivo no se encuentra regulado en el C.P.A.C.A., por expresa remisión de la norma antes transcrita, se hace necesario dar aplicación a los preceptos establecidos en la Ley Objetiva Civil, para efectos del trámite del proceso especial.

En virtud de lo anterior, se tiene que el numeral 3 del artículo 446 del C.G.P., dispone:

“Artículo 446. Liquidación del crédito y las costas. Para la liquidación del crédito y las costas, se observarán las siguientes reglas:

(...)

3. Vencido el traslado, el juez decidirá si aprueba o modifica la liquidación **por auto que solo será apelable cuando resuelva una objeción o altere de oficio la cuenta respectiva. El recurso, que se tramitará en el efecto diferido, no impedirá efectuar el remate de bienes, ni la entrega de dineros al ejecutante en la parte que no es objeto de apelación. (...)** (Negrillas fuera de texto).

Dado que en el presente caso se está recurriendo una providencia en donde se dispuso modificar la liquidación de crédito presentada por la parte ejecutante, aprobando la elaborada por el despacho, el recurso de apelación interpuesto es procedente, y se concederá en el efecto diferido conforme la norma transcrita, ordenándose su remisión al H. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, para lo pertinente.

En mérito de lo expuesto el **JUZGADO SÉPTIMO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ D.C., SECCIÓN SEGUNDA.**

RESUELVE

PRIMERO: CONCEDER en el efecto **DIFERIDO** el recurso de apelación, interpuesto contra el auto de 7 de mayo de 2021.

SEGUNDO: REMÍTASE el expediente al H. Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Reparto-, de manera inmediata, dejándose las constancias a que haya lugar.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

La Juez,

GUERTI MARTÍNEZ OLAYA

DCRE

<p>JUZGADO 7 ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ</p>	<p>POR ANOTACIÓN EN ESTADO ELECTRÓNICO NO. 76 DE FECHA: 17 DE SEPTIEMBRE DE 2021 SE NOTIFICA A LAS PARTES, LA PROVIDENCIA ANTERIOR</p> <p> </p> <p>LA SECRETARIA</p>
---	---

Firmado Por:

**Guerti Martinez Olaya
Juez Circuito
Sala 007 Contencioso Admsección 2**

Juzgado Administrativo
Bogotá D.C., - Bogotá, D.C.

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:

ca27a09b0cf48bd69980fc8bd601c3ade93a4ad7c5f0851905a606408e1db357

Documento generado en 16/09/2021 08:26:30 AM

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>

REPUBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL

JUZGADO SÉPTIMO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ -
SECCIÓN SEGUNDA

AUTO DE SUSTANCIACIÓN No. 961

Septiembre dieciséis (16) de dos mil veintiuno (2021)

REFERENCIA: Exp. EJECUTIVO No. 11001-3335-007-2015-00590-00
EJECUTANTE: ANA JUDITH PARDO ROJAS
EJECUTADO: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL
Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN
SOCIAL UGPP

Revisado el expediente, el Despacho observa que:

Mediante auto de 7 de mayo de 2021, se modificó la liquidación del crédito presentada por la parte ejecutante como ejecutada, a su turno, se aprobó la elaborada por el despacho y se conminó a las partes a dar cumplimiento a la providencia en mención (fls. 246-248).

El 13 de mayo de 2021, la parte ejecutante presentó recurso de apelación contra la providencia del 7 de mayo de 2021 (fls. 257-259).

Se procede entonces a resolver sobre la concesión del recurso ordinario de apelación interpuesto por el apoderado de la ejecutante.

Sobre el particular, el artículo 306 de la Ley 1437 de 2011, establece:

“Artículo 306. Aspectos no regulados. *En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo”*

En razón a que el procedimiento del proceso ejecutivo no se encuentra regulado en el C.P.A.C.A., por expresa remisión de la norma antes transcrita, se hace necesario dar aplicación a los preceptos establecidos en la Ley Objetiva Civil, para efectos del trámite del proceso especial.

En virtud de lo anterior, se tiene que el numeral 3 del artículo 446 del C.G.P., dispone:

“Artículo 446. Liquidación del crédito y las costas. *Para la liquidación del crédito y las costas, se observarán las siguientes reglas:*

(...)

3. Vencido el traslado, el juez decidirá si aprueba o modifica la liquidación por auto que solo será apelable cuando resuelva una objeción o altere de oficio la cuenta respectiva. El recurso, que se tramitará en el efecto diferido, no

impedirá efectuar el remate de bienes, ni la entrega de dineros al ejecutante en la parte que no es objeto de apelación. (...)” (Negrillas fuera de texto).

Dado que en el presente caso se está recurriendo una providencia en donde se dispuso modificar la liquidación de crédito presentada por las partes, aprobando la elaborada por el despacho, el recurso de apelación interpuesto es procedente, y se concederá en el efecto diferido conforme la norma transcrita, ordenándose su remisión al H. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, para lo pertinente.

Por último se advierte que el 13 de mayo de 2021, la parte ejecutada, presentó objeción a la liquidación del crédito (fls. 249-256), sin embargo el despacho no dará trámite a la objeción presentada, debido a que, de la liquidación presentada por la ejecutante se dio traslado a la ejecutada como consta a folio 231, y fenecido el término de 3 días, no fueron presentadas las objeciones.

Lo anterior de conformidad con el numeral 2 del artículo 446 del CGP, que manifiesta:

“(...) 2. De la liquidación presentada se dará traslado a la otra parte en la forma prevista en el artículo 110, por el término de tres (3) días, dentro del cual sólo podrá formular objeciones relativas al estado de cuenta, para cuyo trámite deberá acompañar, so pena de rechazo, una liquidación alternativa en la que se precisen los errores puntuales que le atribuye a la liquidación objetada. (...)” (Negrillas fuera de texto).

Además se reitera que mediante auto de 7 de mayo de 2021, se modificó la liquidación del crédito presentada por la parte ejecutante como ejecutada y a su turno, se aprobó la elaborada por el despacho, por lo que el memorial de la referencia es extemporáneo.

En mérito de lo expuesto el **JUZGADO SÉPTIMO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ D.C., SECCIÓN SEGUNDA.**

RESUELVE

PRIMERO: CONCEDER en el efecto **DIFERIDO** el recurso de apelación, interpuesto contra el auto de 7 de mayo de 2021.

SEGUNDO: REMÍTASE el expediente al H. Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Reparto-, de manera inmediata, dejándose las constancias a que haya lugar.

TERCERO: No dar trámite al escrito de objeción a la liquidación del crédito, presentado por la parte ejecutada, el 13 de mayo de 2021, por lo expuesto.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

La Juez,

GUERTI MARTÍNEZ OLAYA

DCRE

<p>JUZGADO 7 ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ</p>	<p>POR ANOTACIÓN EN ESTADO ELECTRÓNICO NO. 76 DE FECHA: 17 DE SEPTIEMBRE DE 2021 SE NOTIFICA A LAS PARTES, LA PROVIDENCIA ANTERIOR</p> <p> LA SECRETARIA</p>
---	--

Firmado Por:

**Guerti Martinez Olaya
Juez Circuito
Sala 007 Contencioso Admsección 2
Juzgado Administrativo
Bogotá D.C., - Bogotá, D.C.**

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:

01b4ad803478b82aa160b1f0b0ba139201ead8bf2680d228539925490bf881fa

Documento generado en 16/09/2021 08:26:33 AM

**Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>**

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL

JUZGADO SÉPTIMO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ
D.C., SECCIÓN SEGUNDA

AUTO INTERLOCUTORIO No. 475

Septiembre dieciséis (16) de dos mil veintiuno (2021)

REFERENCIA: Exp. A. E. 11001-3335-007-2015-00445-00
EJECUTANTE: CESAR EDUARDO RIVEROS MONCADA
EJECUTADO: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN
PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA
PROTECCIÓN SOCIAL - UGPP

Por Auto del 6 de noviembre de 2015, la entonces titular del Despacho, libró mandamiento de pago por la suma de \$1.269.568, correspondiente a intereses moratorios, causados desde el 28 de enero de 2013 hasta el 28 de febrero de 2013, sin que obre liquidación alguna (fl. 70 a 72).

En Audiencia Inicial celebrada el 24 de enero de 2017, el Juez precedente ordenó seguir adelante con la ejecución, por las sumas ordenadas en el mandamiento de pago, además de ordenar la práctica de la liquidación del crédito (fl. 146 a 155). Decisión que fue confirmada por el H. Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección A, mediante providencia del 25 de mayo de 2017 (fl. 159 a 167).

La liquidación del crédito presentada por el apoderado de la parte ejecutante, obra en los folios 172 a 175 del expediente, en la cual se observa que efectuó una primera liquidación, **entre el 18 de julio de 2012 (fecha de ejecutoria de la sentencia)** y el 25 de marzo de 2013 (*fecha efectiva de pago*), tomando como capital \$45.888.018, arrojando **\$9.958.964**, y una segunda liquidación, entre el 26 de marzo de 2013, al 30 de septiembre de 2017, cuyo capital correspondió a \$9.958.964, arrojando **\$13.759.513**, para un total de intereses moratorios de **\$23.718.207**.

Es así que, por Auto del 22 de febrero de 2018, el entonces titular del Despacho impartió aprobación a la liquidación efectuada por la parte ejecutante, esto es, por la suma de **\$23.718.207**, entre el 18 de julio de 2012 y el 30 de septiembre de 2017 (fl. 178), decisión contra la cual no se interpuso recurso alguno.

Ahora bien, el apoderado del ejecutante, radicó escrito de corrección, como consta en el archivo digital "06.SOLICITUD CORRECCION.pdf", en el cual solicita:

"(...) respetuosamente solicito a su Despacho se efectúe la CORRECCIÓN del NUMERAL PRIMERO de la sentencia proferida por su Despacho el día 6 de noviembre de 2.015, en el sentido de que determinar expresamente que la fecha de ejecutoria de la sentencia base de la acción ejecutiva, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda Subsección "A" que reconoció la Reliquidación de la pensión del señor CESAR EDUARDO RIVEROS MONCADA fue el día 18 de julio de 2.012 y no el 28 de Enero de 2.013 como en forma incorrecta quedó consignado dentro de la sentencia que accedió al reconocimiento de los intereses moratorios causados sobre las sumas retroactivas canceladas parcialmente por la Entidad demandada.

Al respecto es importante tener en cuenta que el error involuntario por parte de su Despacho tuvo su origen en la certificación expedida el día 21 de mayo de 2013 en la cual se consignó que la providencia quedó en firme y debidamente ejecutoriada el día 28 de Enero de 2.013, cuando la fecha real corresponde al 18 de Julio de 2.012, como consta en la nueva certificación expedida por su Despacho de fecha 12 de Julio de 2.021, por lo cual el numeral 1) de la providencia del 6 de noviembre de 2.015

deberá corregirse en el sentido de que el mandamiento de pago por concepto de los intereses moratorios causados a partir de la fecha de ejecutoria, es decir, deberá ser desde el 18 de Julio de 2.012 hasta el 28 de febrero de 2.013 (fecha efectiva del pago)."

Para resolver, de conformidad con el artículo 306 del C.P.A.C.A., el cual dispone que en los aspectos no regulados en ese Código se seguirá el Código de Procedimiento Civil, hoy Código General del Proceso, hemos de remitirnos al artículo 286 del C.G.P., que respecto de la corrección de providencias, dispone:

"Artículo 286. Corrección de errores aritméticos y otros. Toda providencia en que se haya incurrido en error puramente aritmético puede ser corregida por el juez que la dictó en cualquier tiempo, de oficio o a solicitud de parte, mediante auto.

Si la corrección se hiciera luego de terminado el proceso, el auto se notificará por aviso.

Lo dispuesto en los incisos anteriores se aplica a los casos de error por omisión o cambio de palabras o alteración de estas, siempre que estén contenidas en la parte resolutive o influyan en ella." (Resaltado del Despacho)

Conforme al anterior precepto normativo, el Despacho examinó la petición de la parte ejecutante y la providencia de fecha 6 de noviembre de 2017, encontrando, en primer lugar, que no se trata de la sentencia emitida dentro del proceso ejecutivo, sino del Auto que libró el mandamiento de pago por la juez titular en ese momento, en la cual no se efectuó liquidación alguna, y se adoptó la decisión allí contenida, conforme a la documental obrante en el expediente, es decir, de acuerdo a la información vista especialmente en el folio 33 del plenario, que corresponde a la certificación de ejecutoria de las sentencias base de ejecución.

Se precisa, que la Sección Segunda – Subsección A del H. Consejo de Estado, en providencia del 28 de noviembre de 2018, se pronunció manifestando que **el mandamiento de pago no es una situación inamovible para el juez, pues con posterioridad a la expedición de esta providencia es posible variar el monto de las sumas adeudadas con el fin de adoptar una decisión que se ajuste a la realidad procesal de cara al título ejecutivo, así como a los demás elementos de juicio que obren en el expediente**¹.

De ahí que, por Auto del 22 de febrero de 2018, el entonces titular del Despacho impartió aprobación a la liquidación del crédito realizada por la parte ejecutante, en la cual **el apoderado partió desde el 18 de julio de 2012** y hasta el al 30 de septiembre de 2017, arrojando como intereses moratorios, la suma de **\$23.718.207**, esto es, que no se tuvo en cuenta lo ordenado en el mandamiento de pago, sino lo manifestado por el ejecutante, que, como se advierte, corresponde a los términos en los que fue presentada la referida liquidación, sin modificación alguna, decisión que no fue recurrida por las partes.

Así las cosas, al ser el auto de aprobación de liquidación del crédito, la decisión objeto de cumplimiento por la entidad ejecutada dentro del presente asunto, **no resulta procedente la corrección deprecada**, por cuanto, se reitera, la misma fue adoptada en

¹ La conclusión anterior, la Corporación la fundó en los siguientes razonamientos:

i) El juez no se encuentra facultado para abstenerse de tramitar los procesos ejecutivos, por considerar que lo pretendido excede lo ordenado en la sentencia judicial objeto de cumplimiento, sin haber realizado el estudio jurídico correspondiente, pues tal apreciación debe ser objeto de debate a través de los mecanismos de contradicción y defensa establecidos para esta clase de procesos.

ii) En la etapa de revisión de la liquidación del crédito que presenten las partes, el juez puede aprobarla o modificarla. A su vez, «este trámite no puede llevarse a cabo antes de que se surtan los pasos que la ley ha previsto para el proceso ejecutivo».

iii) La estimación de la suma que el ejecutante considera adeudada no hace parte del título de recaudo que se pretende hacer valer en los procesos ejecutivos, sino que se trata de una tasación estimativa de los valores que a su juicio se deben pagar, razón por la que estas cuantías pueden ser controvertidas por el ejecutado a través de la presentación del recurso de reposición, la presentación de excepciones o en la etapa de liquidación del crédito.

iv) Si con posterioridad a librar el mandamiento de pago, el juez se percató que aquél se profirió por mayor valor al que correspondía de conformidad con la sentencia judicial cuyo cobro se pretendía, está facultado para subsanar la inconsistencia advertida, pues los artículos 42 del Código General del Proceso y 207 del CPACA le imponen el deber de realizar el control de legalidad de la actuación procesal, una vez agotada cada etapa del proceso.

v) En consonancia con lo anterior, en un caso en que se libró mandamiento de pago con inclusión de prestaciones sociales que no fueron reconocidos en la sentencia objeto de ejecución, esta Corporación sostuvo que «los autos ilegales, como lo es aquel que libró el mandamiento por una suma superior a la que correspondía, no atan al juez ni a las partes pues carecen de ejecutoria», por lo cual la autoridad judicial puede hacer un control de legalidad posterior y subsanar las imprecisiones que evidencie.

los términos en los que fue presentada por el ejecutante, y la providencia a corregir no corresponde a aquella respecto de la cual la UGPP tenga la obligación de dar cumplimiento.

De otra parte, se ordenará requerir nuevamente a la parte ejecutante, a fin de que se sirva manifestar en relación con la documental obrante en los folios 197 a 199 y 220 a 221 del expediente, en los cuales se observa un pago parcial efectuado por la UGPP al ejecutante, a fin de que se pronuncie sobre el mismo.

En consecuencia, el **JUZGADO SÉPTIMO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ, D.C., SECCIÓN SEGUNDA,**

RESUELVE:

PRIMERO: DENEGAR la solicitud de corrección del Auto proferido el 6 de noviembre de 2017, por los motivos expuestos en la parte considerativa de esta providencia.

SEGUNDO. REQUERIR a la parte ejecutante, para que en el término de CINCO (5) DÍAS, se sirva pronunciarse en relación con la documental obrante en los folios 197 a 199 y 220 a 221 del expediente.

TERCERO. En firme esta providencia, por Secretaría ingrésese el proceso al Despacho para proveer lo que corresponda.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

La Juez,

GUERTI MARTÍNEZ OLAYA

ECB

<p>JUZGADO 7 ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ</p>	<p>POR ANOTACIÓN EN ESTADO ELECTRÓNICO NO. <u>076</u> DE FECHA: <u>17 DE SEPTIEMBRE DE 2021</u> SE NOTIFICA A LAS PARTES, LA PROVIDENCIA ANTERIOR LA SECRETARIA</p> <p> SECRETARIA</p>
--	---

Firmado Por:

Guerti Martinez Olaya
Juez Circuito
Sala 007 Contencioso Admsección 2
Juzgado Administrativo
Bogotá D.C., - Bogotá, D.C.

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:

0625a4c6fbe15a5ca670c87a99c74747d612efc7d858e924c5ba0d5e94417918

Documento generado en 16/09/2021 08:26:27 AM

**Valide este documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>**

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL

JUZGADO SÉPTIMO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ
D.C., SECCIÓN SEGUNDA

AUTO DE SUSTANCIACIÓN No. 965

Septiembre dieciséis (16) de dos mil veintiuno (2021)

REFERENCIA: Exp. A. E. 11001-3335-007-2015-00782-00
EJECUTANTE: JORGE ENRIQUE REYES PEÑA
EJECUTADO: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN
PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA
PROTECCIÓN SOCIAL - UGPP

La apoderada de la parte ejecutada, allega escrito a través del cual informa sobre el fallecimiento del señor Jorge Enrique Reyes Peña, anexando para tal efecto certificado expedido por la Registraduría Nacional del Estado Civil, el 24 de agosto de 2021, en la cual consta que el estado del documento de identidad del ejecutante, es "CANCELADA POR MUERTE".

En atención a lo anterior, a fin de continuar con el curso del proceso se **ORDENA requerir** al **Dr. MANUEL SANABRIA CHACÓN**, quien venía representando al ejecutante, para que en el término de **OCHO (8) DÍAS**, informe sobre la existencia de herederos o del trámite del proceso de sucesión adelantado por el fallecimiento del señor Jorge Enrique Reyes Peña o se hagan las manifestaciones a que haya lugar.

Por Secretaría comuníquese al abogado por el medio más expedito.

Vencido el término anterior, ingrésese el proceso al Despacho para proveer lo que corresponda.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

La Juez,

GUERTI MARTÍNEZ OLAYA

ECB

<p>JUZGADO 7 ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ</p>	<p>POR ANOTACIÓN EN ESTADO ELECTRÓNICO NO. <u>076</u> DE FECHA: <u>17 DE SEPTIEMBRE DE 2021</u> SE NOTIFICA A LAS PARTES, LA PROVIDENCIA ANTERIOR LA SECRETARIA</p> <p> SECRETARIA</p>
--	---

Firmado Por:

**Guerti Martinez Olaya
Juez Circuito
Sala 007 Contencioso Admsección 2
Juzgado Administrativo
Bogotá D.C., - Bogotá, D.C.**

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:

7db4d63d56a3af0c84508893f9db7c6aa76edbe8d2f926cdac9ec54585a60d76

Documento generado en 16/09/2021 09:29:30 AM

**Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>**

REPUBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL

JUZGADO SÉPTIMO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ -
SECCIÓN SEGUNDA

AUTO DE SUSTANCIACIÓN No. 960

Septiembre dieciséis (16) de dos mil veintiuno (2021)

REFERENCIA: Exp. EJECUTIVO No. 11001-3335-007-2016-00395-00
EJECUTANTE: HÉCTOR DE JESÚS NIÑO SALAMANCA
EJECUTADO: CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICÍA NACIONAL -
CASUR

Revisado el expediente, el Despacho observa que:

Mediante auto de 6 de agosto de 2021, se ordenó a las partes dar cumplimiento al numeral cuarto de la providencia de 19 de febrero de 2019, así mismo que informaran si se ha realizado pago alguno, con posterioridad a la expedición de la Resolución 2809 de 23 de abril de 2013 (fl. 160).

El 11 de agosto de 2021, la parte ejecutada manifiesta que no se evidencia pago adicional al ordenado en la Resolución 2809 de 23 de abril de 2013¹, a través de la cual se dio cumplimiento al fallo judicial de 15 de agosto de 2012 (fl. 161-162).

Se tiene entonces, que a la fecha no ha sido presentada la liquidación del crédito, necesaria para continuar con la siguiente etapa procesal, en la forma establecida en el artículo 446 del C.G.P., el cual establece claramente:

“ARTÍCULO 446. LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO Y LAS COSTAS. Para la liquidación del crédito y las costas, se observarán las siguientes reglas:

1. Ejecutoriado el auto que ordene seguir adelante la ejecución, o notificada la sentencia que resuelva sobre las excepciones siempre que no sea totalmente favorable al ejecutado *cuquiera de las partes podrá presentar la liquidación del crédito con especificación del capital y de los intereses causados hasta la fecha de su presentación, y si fuere el caso de la conversión a moneda nacional de aquel y de estos, de acuerdo con lo dispuesto en el mandamiento ejecutivo, adjuntando los documentos que la sustenten, si fueren necesarios.*

2. De la liquidación presentada se dará traslado a la otra parte en la forma prevista en el artículo 110, por el término de tres (3) días, dentro del cual sólo podrá formular objeciones relativas al estado de cuenta, para cuyo trámite deberá acompañar, so pena de rechazo, una liquidación alternativa en la que se precisen los errores puntuales que le atribuye a la liquidación objetada.

¹ “Por la cual se da cumplimiento a la sentencia proferida por el Juzgado Séptimo Contencioso Administrativo de Bogotá y aclaratoria de fecha 19-09-2012 por el mismo Juzgado, se incrementa asignación mensual de retiro con el I.P.C. y se ordena el pago de sus valores, con fundamento en el expediente del señor AG ® NIÑO SALAMANCA HECTOR DE JESUS, identificado con cédula de ciudadanía número No. 9515209.”

3. Vencido el traslado, el juez decidirá si aprueba o modifica la liquidación por auto que solo será apelable cuando resuelva una objeción o altere de oficio la cuenta respectiva. El recurso, que se tramitará en el efecto diferido, no impedirá efectuar el remate de bienes, ni la entrega de dineros al ejecutante en la parte que no es objeto de apelación.

4. De la misma manera se procederá cuando se trate de actualizar la liquidación en los casos previstos en la ley, para lo cual se tomará como base la liquidación que esté en firme.” (Negritas y subrayas fuera de texto).

Por lo que se ordena **REQUERIR a la parte ejecutante y ejecutada para que en el término de ocho (8) días**, siguientes a la notificación de esta providencia, alleguen la correspondiente liquidación del crédito, en los términos específicos del numeral 1 del artículo 446 del C.G.P., esto es, en la forma allí dispuesta

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

La Juez,

GUERTI MARTÍNEZ OLAYA

DCRE

<p>JUZGADO 7 ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ</p>	<p>POR ANOTACIÓN EN ESTADO ELECTRÓNICO NO. 76 DE FECHA: 17 DE SEPTIEMBRE DE 2021 SE NOTIFICA A LAS PARTES, LA PROVIDENCIA ANTERIOR</p> <p>LA SECRETARIA</p>
---	--

Firmado Por:

**Guerti Martinez Olaya
Juez Circuito
Sala 007 Contencioso Admsección 2
Juzgado Administrativo
Bogotá D.C., - Bogotá, D.C.**

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:

d00505281af8e1975f656797e7aea7c0c0c413333752935f0c66c507f6721499

Documento generado en 16/09/2021 08:26:41 AM

**Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>**

REPUBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL

JUZGADO SÉPTIMO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ -
SECCIÓN SEGUNDA

AUTO DE SUSTANCIACIÓN No. 963

Septiembre dieciséis (16) de dos mil veintiuno (2021)

REFERENCIA: Exp. EJECUTIVO No. 11001-3335-007-2016-00568-00
EJECUTANTE: ELVIRA BOGOTÁ DE MORENO
EJECUTADO: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL
Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN
SOCIAL - UGPP

Revisado el expediente, el Despacho observa que:

Mediante auto de 7 de mayo de 2021, se modificó la liquidación del crédito presentada por la parte ejecutante y a su turno, se aprobó la elaborada por el despacho y se conminó a las partes a dar cumplimiento a la providencia en mención (fls. 236-238).

El 13 de mayo de 2021, la parte ejecutante presentó recurso de apelación contra la providencia del 7 de mayo de 2021 (fls. 239-241).

Se procede entonces a resolver sobre la concesión del recurso ordinario de apelación interpuesto por el apoderado de la ejecutante, contra el auto de 7 de mayo de 2021.

Sobre el particular, el artículo 306 de la Ley 1437 de 2011, establece:

“Artículo 306. Aspectos no regulados. *En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo”*

En razón a que el procedimiento del proceso ejecutivo no se encuentra regulado en el C.P.A.C.A., por expresa remisión de la norma antes transcrita, se hace necesario dar aplicación a los preceptos establecidos en la Ley Objetiva Civil, para efectos del trámite del proceso especial.

En virtud de lo anterior, se tiene que el numeral 3 del artículo 446 del C.G.P., dispone:

“Artículo 446. Liquidación del crédito y las costas. *Para la liquidación del crédito y las costas, se observarán las siguientes reglas:*

(...)

3. Vencido el traslado, el juez decidirá si aprueba o modifica la liquidación *por auto que solo será apelable cuando resuelva una objeción o altere de oficio la cuenta respectiva. El recurso, que se tramitará en el efecto diferido, no impedirá efectuar el remate de bienes, ni la entrega de dineros al ejecutante en la parte que no es objeto de apelación. (...)* (Negrillas fuera de texto).

Dado que en el presente caso se está recurriendo una providencia en donde se dispuso modificar la liquidación de crédito presentada por las partes, aprobando la elaborada por el despacho, el recurso de apelación interpuesto es procedente, y se concederá en el efecto diferido conforme la norma transcrita, ordenándose su remisión al H. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, para lo pertinente.

En mérito de lo expuesto el **JUZGADO SÉPTIMO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ D.C., SECCIÓN SEGUNDA.**

RESUELVE

PRIMERO: CONCEDER en el efecto **DIFERIDO** el recurso de apelación, interpuesto contra el auto de 7 de mayo de 2021.

SEGUNDO: REMÍTASE el expediente al H. Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Reparto-, de manera inmediata, dejándose las constancias a que haya lugar.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

La Juez,

GUERTI MARTÍNEZ OLAYA

DCRE

<p>JUZGADO 7 ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ</p>	<p>POR ANOTACIÓN EN ESTADO ELECTRÓNICO NO. 76 DE FECHA: 17 DE SEPTIEMBRE DE 2021 SE NOTIFICA A LAS PARTES, LA PROVIDENCIA ANTERIOR</p> <p> LA SECRETARIA</p>
---	--

Firmado Por:

**Guerti Martínez Olaya
Juez Circuito
Sala 007 Contencioso Admsección 2
Juzgado Administrativo
Bogotá D.C., - Bogotá, D.C.**

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:

129b5113ffadc4fe706f231b28ed8b45dafcdc620b4eb3344c209542c0d0f0ab

Documento generado en 16/09/2021 08:26:44 AM

**Valide este documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>**

REPUBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL

JUZGADO SÉPTIMO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ -
SECCIÓN SEGUNDA

AUTO DE SUSTANCIACIÓN No. 959

Septiembre dieciséis (16) de dos mil veintiuno (2021)

REFERENCIA: Exp. EJECUTIVO No. 11001-3335-007-2016-00138-00
EJECUTANTE: DIANA FERNANDA FORERO VARGAS Y FELIZ ARTURO FORERO MEDINA en calidad de sucesores procesales de LUZ MARINA VARGAS VARGAS
EJECUTADO: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL - UGPP

Mediante Auto del 14 de noviembre de 2017, el entonces titular del Despacho modificó la liquidación del crédito presentada por la parte ejecutante, impartiendo aprobación a la realizada por el Despacho, por la suma total de \$463.332.628,42 (fl. 240 a 244), decisión contra la cual no se interpuso recurso alguno.

El H. Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección B, a través de providencia emitida el 4 de octubre de 2018, al resolver el recurso de apelación contra la sentencia que ordenó seguir adelante con la ejecución, confirmó la referida sentencia, instando al Despacho, a fin de dar traslado a la parte ejecutada de la liquidación presentada por la parte ejecutante y modificada por el Juzgado, a fin de que presentada las objeciones de ley (fl. 263 a 269).

En cumplimiento a lo anterior, por Auto del 18 de diciembre de 2019, se obedeció y cumplió lo resuelto por el Superior, ordenándose que por la Secretaria del Despacho se diera cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 446 del C.G.P., a fin de correr traslado a la entidad ejecutada, de la liquidación del crédito presentada por la parte ejecutante y modificada por el Juzgado, entre otras decisiones (fl. 342 a 344).

Vencido dicho término, y en atención a que la entidad no efectuó pronunciamiento alguno, se profirió nuevamente Auto el 5 de agosto de 2021, en el cual se requirió a la UGPP para que se sirviera efectuar pronunciamiento alguno en relación con lo ordenado por el Despacho en providencia del 18 de diciembre de 2019 (archivo digital “2016-138 Ordena requerir (1).pdf”).

No obstante lo anterior, advierte el Despacho que hasta este momento la entidad ejecutada no ha realizado manifestación alguna en relación con la liquidación del crédito, razón por la cual se dará continuación al trámite procesal correspondiente, más aun cuando la entidad ha tenido la oportunidad de pronunciarse desde el 14 de noviembre de 2017, momento en el cual se aprobó la referida liquidación, sin embargo, de acuerdo a lo

dispuesto por el H. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, se puso en conocimiento nuevamente dicha decisión, respecto de la cual, se reitera, guardó silencio.

Por lo anterior, y teniendo en cuenta que no se acredita el pago de la obligación impuesta a la UGPP, desde el Auto del 14 de noviembre de 2017, se ordena **REQUERIR** a la **UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL –UGPP**, para que, en el término de los **OCHO (8) DÍAS** siguientes a la notificación de la presente providencia, **se sirva informar el estado del trámite de pago de la orden impuesta por el Despacho, en Auto del 14 de noviembre de 2017, remitiendo para tal efecto los respectivos comprobantes de pago, los actos administrativos que dan cumplimiento a la orden, con la constancia de notificación de la misma, a favor de la señora LUZ MARINA VARGAS VARGAS, quien se identificaba con la cédula de ciudadanía No. 41.630.412 (q.e.p.d.), actuando como sucesores procesales, los señores DIANA FERNANDA FORERO VARGAS y FELIZ ARTURO FORERO MEDINA**

Cumplido lo anterior, **INGRÉSESE DE MANERA INMEDIATA** el expediente al Despacho, para lo pertinente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

La Jueza,

GUERTI MARTÍNEZ OLAYA

ECB

<p>JUZGADO</p> <p>7</p> <p>ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ</p>	<p>POR ANOTACIÓN EN ESTADO ELECTRÓNICO NO. <u>076</u> DE FECHA: <u>17 DE SEPTIEMBRE DE 2021</u> SE NOTIFICA A LAS PARTES, LA PROVIDENCIA ANTERIOR LA SECRETARIA</p> <p> </p>
--	---

Firmado Por:

Guerti Martinez Olaya
Juez Circuito
Sala 007 Contencioso Admsección 2
Juzgado Administrativo
Bogotá D.C., - Bogotá, D.C.

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:

d7265c0d5d0d777a6a2c8280ebe504997724ef4047f384a6b0cbeade615c03aa

Documento generado en 16/09/2021 08:26:38 AM

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:

<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>

REPUBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL

JUZGADO SÉPTIMO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE
BOGOTÁ
SECCIÓN SEGUNDA

AUTO INTERLOCUTORIO ORDINARIO Nº 498

Septiembre dieciséis (16) de dos mil veintiuno (2021)

REFERENCIA Exp. N.R. No. 1100133350072017-00040-00
DEMANDANTE ANA DOLORES HUERTAS DE FERNANDEZ
DEMANDADO NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACION – FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO

En la Audiencia Inicial llevada a cabo el 4 de junio de 2021, se interpuso recurso de apelación por la parte demandante, en contra de la Sentencia proferida en Audiencia, en donde la abogada manifestó que lo sustentaría dentro del término de ley¹, esto es, dentro del término de (10) días, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 247 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 67² de la Ley 2080 de 2021³.

No obstante lo anterior, revisado el sistema de consulta de procesos de la Rama Judicial, se observa que la apelante no sustentó el recurso de alzada, por lo que vencido el término legal, se declarará desierto el mismo.

En mérito de lo expuesto, el **JUZGADO SÉPTIMO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ D.C., SECCIÓN SEGUNDA,**

RESUELVE:

PRIMERO- DECLARAR DESIERTO, el recurso de apelación presentado por la apoderada de la parte demandante, en contra de la Sentencia proferida en Audiencia Inicial, el 4 de junio de 2021, por las razones indicadas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO.- Una vez en firme este proveído continúese con el trámite que corresponda.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La Juez,

GUERTI MARTÍNEZ OLAYA

DCRE

JUZGADO 7 ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ	POR ANOTACIÓN EN ESTADO ELECTRÓNICO NO. 76 DE FECHA: 17 DE SEPTIEMBRE DE 2021 SE NOTIFICA A LAS PARTES, LA PROVIDENCIA ANTERIOR LA SECRETARIA
---	--

¹ “(...) Téngase por interpuesto el recurso de apelación formulado por la apoderada de la parte demandante, contra la Sentencia No. 040, que declaró probada de Oficio la excepción de prescripción, el cual como fue manifestado por la apoderada, se sustentará dentro del término legal previsto, en el artículo 247 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021.”

² “ARTÍCULO 247. Trámite del recurso de apelación contra sentencias. El recurso de apelación contra las sentencias proferidas en primera instancia se tramitará de acuerdo con el siguiente procedimiento:

1. El recurso deberá interponerse y sustentarse ante la autoridad que profirió la providencia, dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación. Este término también aplica para las sentencias dictadas en audiencia. (...)”

³ “Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - Ley 1437 de 2011- y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción”

Firmado Por:

**Guerti Martinez Olaya
Juez Circuito
Sala 007 Contencioso Admsección 2
Juzgado Administrativo
Bogotá D.C., - Bogotá, D.C.**

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **1129435492ebbc696387e177dad2ecfa0e715880f9d64382a81d83a4cf46a2a**
Documento generado en 16/09/2021 08:26:11 AM

**Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>**

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL

JUZGADO SÉPTIMO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL BOGOTÁ
SECCIÓN SEGUNDA

AUTO SUSTANCIACIÓN No. 986

Septiembre dieciséis (16) de dos mil veintiuno (2021).

REFERENCIA: Exp. NyR 11001-3335-007-2017-00264-00
DEMANDANTE: MARÍA ELSA SALAMANCA
DEMANDADO: NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN – FONDO NACIONAL PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO FNPSM

Obedézcase y Cúmplase, lo dispuesto por el H. Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección E, que mediante providencia calendada del 23 de agosto de 2021 – M.P. Dr. Ramiro Ignacio Dueñas Rugnon, rechazó por improcedente el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra el auto de 27 de noviembre de 2020.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

La Juez,

GUERTI MARTÍNEZ OLAYA

DCRE

<p>JUZGADO 7 ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ</p>	<p>POR ANOTACIÓN EN ESTADO ELECTRÓNICO NO. 076 ESTADO DE FECHA: 17 DE SEPTIEMBRE DE 2021 SE NOTIFICA A LAS PARTES, LA PROVIDENCIA ANTERIOR</p> <p>LA SECRETARIA</p>
---	--

Firmado Por:

Guerti Martinez Olaya
Juez Circuito
Sala 007 Contencioso Admsección 2
Juzgado Administrativo
Bogotá D.C., - Bogotá, D.C.

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:

410a7813d30ee1cfdac83ceac7c4f05c120773c0ddc3fd357e06e4ad9fcd84f8

Documento generado en 16/09/2021 08:26:13 AM

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:

<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL

JUZGADO SÉPTIMO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ -
SECCIÓN SEGUNDA

AUTO INTERLOCUTORIO No. 474

Septiembre dieciséis (16) de dos mil veintiuno (2021).

REFERENCIA: Exp. A. E. 11001-3335-007-2017-00-521-00
EJECUTANTE: LUCY OMAIRA GARZÓN DE CASTAÑEDA
EJECUTADO: NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO

Procede el Despacho, a resolver sobre la aprobación de la liquidación del crédito, respecto de la presentada por la parte ejecutante, visible en el folio 107, como se observa en el expediente digital.

ANTECEDENTES

La señora LUCY OMAIRA GARZÓN DE CASTAÑEDA, solicitó se librara el mandamiento ejecutivo, por las siguientes sumas:

“11.. Por la suma de DOCE MILLONES OCHOCIENTOS SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL PESOS CON CATORE CENTAVOS (\$12.806.324,14 M/CTE), por concepto de INTERESES MORATORIOS DEL ARTICULO 176 Y 177 del C.C.A.

2. Que en caso que la entidad demandada alegue pago en cualquiera de las modalidades, se tenga para todos los efectos legales como un pago parcial de capital y se deben los intereses, por lo tanto se imputen en la forma establecida en el artículo 1653 del Código Civil.

*3. Condenar a pagar a la demandada las costas y agencias en derecho del presente proceso”.*¹

Por Auto del 12 de abril de 2018, el entonces titular del Despacho, procedió a librar mandamiento de pago por las siguientes sumas, así:

*“PRIMERO.- ORDENAR a la NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO a CANCELARLE a la demandante señora LUCY OMAIRA GARZÓN DE CASTAÑEDA, identificada con la cédula de ciudadanía No. 41.514.838 de Bogotá D.C. la suma de OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL NOVENTA Y SIETE PESOS CON ONCE CENTAVOS M/CTE (\$8.440.097,11), como saldo a su favor correspondiente a los intereses dejados de cancelar el periodo comprendido entre el 21 de junio de 2012 (día siguiente a la presentación de la solicitud de cumplimiento de los fallos objeto de ejecución) al 30 de junio de 2013 (fecha del pago)
(...)”*²

En Auto del 4 de julio de 2019, se ordenó seguir adelante con la ejecución para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en dicha providencia, por la suma de \$9.968.065,05, por concepto de intereses moratorios (fl. 82 a 90).

Ante la inactividad de las partes, por Auto del 1 de octubre de 2020, el Despacho las requirió a fin de que presentaran la respectiva liquidación del crédito (fl. 102).

En cumplimiento a lo anterior, en el folio 107 del plenario, obra escrito por medio del cual el apoderado de la parte ejecutante presenta la liquidación del crédito, arrojándole un valor adeudado por concepto de intereses moratorios, de **\$15.606.495,05**, desde el 14 de octubre de 2011 al 14 de abril de 2012, y del 21 de junio de 2012 al 31 de mayo de

¹ Ver folio 52 y vto.

² Ver folios 58 a 61

2013, de acuerdo a la liquidación realizada por el Despacho en el auto que ordenó seguir adelante con la ejecución.

De acuerdo a lo manifestado por el Ministerio de Educación (fl. 109 y 110), por Auto del 5 de agosto de 2021, se ordenó requerir a la Fiduprevisora S.A., para que se sirviera dar cumplimiento al Auto del 4 de julio de 2019, y dar aplicación al artículo 446 del C.G.P. (archivo digital "03.2017-00521 Requiere.pdf").

Una vez se describió el traslado de la liquidación presentada por la parte ejecutante a la ejecutada (fl. 111), la misma guardó silencio.

CONSIDERACIONES

El Despacho en esta oportunidad y considerando la facultad que le reviste de modificar el mandamiento de pago, sobre lo cual se pronunció mediante Auto de noviembre 28 de 2018, la Sección Segunda – Subsección A del H. Consejo de Estado, reiterando tal posibilidad al concluir que al efectuarse un análisis armónico entre los artículos 446 (liquidación del crédito y costas), 430 (mandamiento ejecutivo) y artículo 42 (facultad de saneamiento) del Código General del Proceso; **el mandamiento de pago no se convierte en una situación inamovible para el juez, pues con posterioridad a la expedición de esta providencia es posible variar el monto de las sumas adeudadas con el fin de adoptar una decisión que se ajuste a la realidad procesal de cara al título ejecutivo, así como a los demás elementos de juicio que obren en el expediente**³.

Además, «*el papel del juez ordinario en el Estado Social de Derecho es el del funcionario activo, vigilante y garante de los derechos materiales que consulta la realidad subyacente de cada caso para lograr la aplicación del derecho sustancial, la búsqueda de la verdad y, por ende, la justicia material, por lo que al advertir un error debe proceder a subsanarlo para no seguir incurriendo en el mismo, más aún, cuando pueden estar comprometidos recursos públicos*»⁴.

Así también, lo ha considerado el H. Consejo de Estado, en providencia del 31 de julio de 2019, con ponencia de la Consejera, Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez, al señalar que la finalidad de la liquidación del crédito es concretar el valor económico de la obligación, una vez se tiene certeza sobre el contenido de la misma y su exigibilidad, la cual queda sujeta a la revisión del Juez, quien decide si se aprueba o se modifica⁵.

En dicha providencia, se señaló:

“Es pues, la liquidación del crédito un acto procesal encaminado a precisar y concretar el valor de la ejecución, con la previa realización de las operaciones matemáticas que se requieran e incluyendo los distintos ítems o componentes por los cuales se libró el mandamiento y luego se ordenó seguir adelante con la ejecución – capital, intereses, costas, etc.-

(...)

³ La conclusión anterior, la Corporación la fundó en los siguientes razonamientos:

i) El juez no se encuentra facultado para abstenerse de tramitar los procesos ejecutivos, por considerar que lo pretendido excede lo ordenado en la sentencia judicial objeto de cumplimiento, sin haber realizado el estudio jurídico correspondiente, pues tal apreciación debe ser objeto de debate a través de los mecanismos de contradicción y defensa establecidos para esta clase de procesos.

ii) En la etapa de revisión de la liquidación del crédito que presenten las partes, el juez puede aprobarla o modificarla. A su vez, «este trámite no puede llevarse a cabo antes de que se surtan los pasos que la ley ha previsto para el proceso ejecutivo».

iii) La estimación de la suma que el ejecutante considera adeudada no hace parte del título de recaudo que se pretende hacer valer en los procesos ejecutivos, sino que se trata de una tasación estimativa de los valores que a su juicio se deben pagar, razón por la que estas cuantías pueden ser controvertidas por el ejecutado a través de la presentación del recurso de reposición, la presentación de excepciones o en la etapa de liquidación del crédito.

iv) Si con posterioridad a librar el mandamiento de pago, el juez se percata que aquél se profirió por mayor valor al que correspondía de conformidad con la sentencia judicial cuyo cobro se pretendía, está facultado para subsanar la inconsistencia advertida, pues los artículos 42 del Código General del Proceso y 207 del CPACA le imponen el deber de realizar el control de legalidad de la actuación procesal, una vez agotada cada etapa del proceso.

v) En consonancia con lo anterior, en un caso en que se libró mandamiento de pago con inclusión de prestaciones sociales que no fueron reconocidos en la sentencia objeto de ejecución, esta Corporación sostuvo que «los autos ilegales, como lo es aquel que libró el mandamiento por una suma superior a la que correspondía, no atan al juez ni a las partes pues carecen de ejecutoria», por lo cual la autoridad judicial puede hacer un control de legalidad posterior y subsanar las imprecisiones que evidencie.

⁴ Consejo de Estado, Sección Segunda – Subsección A, auto de noviembre 28 de 2018, consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas, Radicación número: 23001-23-33-000-2013-00136-01(1509-16)

⁵ EXPEDIENTE No. 25000-23-42-000-2015-06054-02(0626-19)

En consecuencia, la liquidación del crédito sólo podrá incluir aquello que fue reconocido en el mandamiento ejecutivo, incluyendo las agencias y costas procesales - éstas últimas que se causan y concretan en la providencia que ordena seguir adelante con la ejecución.

(...)

Todo lo expuesto, lleva al Despacho, a extraer varias conclusiones sobre la liquidación del crédito, a saber:

- i) Sólo resulta procedente efectuarla a partir de la ejecutoria de la providencia que ordena seguir adelante con la ejecución;
- ii) **Es un acto procesal que concreta el contenido de la obligación insatisfecha y se efectúa teniendo en cuenta los conceptos que se reconocieron en el mandamiento ejecutivo, incluyendo las agencias y costas procesales;**
- iii) Puede ser presentada por cualquiera de las partes y entonces se dispondrá un traslado por 3 días para que pueda ser controvertida por las otras partes;
- iv) **Debe ser aprobada por el juez, quien podrá aprobarla o modificarla, según lo que aparezca probado en el proceso** y allí mismo, se deberá resolver cualquier objeción que se haya presentado oportunamente contra la propuesta de liquidación allegada por alguna de las partes, y;
- v) El auto que la aprueba es apelable en el efecto diferido y podrán entregarse aquéllas sumas de dinero que no sean objeto de la apelación.” (Resaltado del Despacho)

Así entonces, se observa, que en el folio 107 del plenario, obra la liquidación del crédito presentada por el apoderado de la parte ejecutante, en la cual tomó la que realizó el Despacho en el Auto que ordenó seguir adelante con la ejecución, que arrojó la suma de \$9.693.543,05. No obstante, lo anterior, resulta necesario advertir, que la suma a cancelar es aquella que resulte luego de realizada la liquidación del crédito, como quiera que se trata de una operación aritmética en donde se calcula el monto final de la deuda a ser cobrada.

Por lo anterior, el Despacho procede a precisar y concretar el valor de la ejecución realizando las operaciones matemáticas necesarias para ello, y así **tendrá como liquidación del crédito** la que se presenta a continuación, en la cual, respecto de los intereses moratorios, este Despacho precisa que viene acogiendo la postura del H. Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda - Subsección “D”⁶⁷⁸⁹, que señala que los intereses moratorios se liquidan sobre el capital **neto indexado** (el resultante luego de efectuar los descuentos en salud y aportes al sistema de seguridad social) y **fijo** (el causado a la fecha de ejecutoria de la sentencia, y que no puede variarse o alterarse mes a mes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 177 del CCA, en razón a que la Sentencia base de recaudo fueron proferida bajo su vigencia), el cual se concretó, y no fue punto de discusión, en el valor neto a pagar determinado en la liquidación realizada por la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

Así las cosas, y teniendo en cuenta que la información obrante en el expediente, que dan cuenta del pago efectuado por la ejecutada para el cumplimiento de las obligaciones impuestas en las Sentencias objeto de ejecución, se tiene lo siguiente:

De conformidad con el contenido de la Resolución No. 0294 del 21 de enero de 2013 (fl. 38 a 41), se efectuó el pago por los siguientes conceptos:

CONCEPTO	DESDE	HASTA	TOTAL
Diferencias Pensionales	08/06/2006	30/06/2013	\$33.654.209
Indexación	08/06/2006	13/10/2011	\$2.257.979
Intereses Corrientes	13/11/2011	12/12/2011	\$274.522
Intereses Moratorios	13/12/2011	05/12/2012	\$5.638.430

⁶ Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, Providencia del 28 de noviembre de 2019, Magistrado Sustanciador: Dr. Cervelón Padilla Linares, expediente 11001-33-35-007-2015-00594-01.

⁷ Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, Providencia del 9 de mayo de 2019, Magistrado Sustanciador: Dr. Luis Alberto Álvarez Parra, expediente 11001-33-35-017-2015-00244-01.

⁸ Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “D” decisión del tres (3) de julio de dos mil veinte (2020), Expediente: 11001-33-35-011 -2015-00767-02, Demandante: Raúl Quevedo Cubillos, Demandada: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social

⁹ Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “C” decisión del ocho (8) de mayo de dos mil diecinueve (2019), Expediente: 11001-33-35-020-2016-00479-00, Demandante: Aura Stella Núñez Caicedo, Demandada: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social.

Por lo tanto, se tomaran los valores correspondientes a “Diferencias Pensionales” e “Indexación”, respecto de los cuales se efectuará el respectivo descuento de ley, quedando entonces el capital de la siguiente manera:

Diferencias Pensionales	\$33.654.209
Indexación	\$2.257.979
SUBTOTAL	\$35.912.188
Descuentos de Ley	-\$4.309.462,56
TOTAL	\$31.602.725,44

Lo anterior, teniendo en cuenta que no es procedente la admisión de otros conceptos en el capital, dado que en los términos del artículo 178 del C.C.A., el ajuste de las condenas solo se puede determinar con base en el IPC hasta la fecha de ejecutoria de la sentencia¹⁰, y de acuerdo a las resoluciones expedidas por la Superintendencia Financiera de Colombia que regulan los intereses.

En relación con el **período de causación de los intereses moratorios**, se debe tener en cuenta, en primer lugar, si la petición de cumplimiento de fallo fue radicada dentro del término de los 6 primeros meses¹¹ después de la ejecutoria (13 de octubre de 2011 – folio 2), esto es, entre el **14 de octubre de 2011 y el 14 de abril de 2012**.

De la documental allegada, especialmente la Resolución No. 0294 del 21 de enero de 2013, “por la cual se da cumplimiento a un fallo judicial”, se consigna que la parte ejecutante allegó petición el **20 de junio de 2012** (fl. 38), razón por la cual, se tiene que cesó la causación de intereses hasta el **14 de abril de 2012**, generándose nuevamente a partir del día siguiente a la presentación de la solicitud, esto es, **desde el 21 de junio de 2012, y hasta el 31 de mayo de 2013**, mes anterior al pago, según se desprende de la documental visible en el folio 42 del plenario.

Ahora bien, la causación de los intereses del capital, debe tomarse desde el día siguiente a la ejecutoria, **14 de octubre de 2011** (fl. 2), hasta el **14 de abril de 2012** (6 primeros meses), y desde el **21 de junio de 2012** (día siguiente a la presentación de la solicitud) hasta el **31 de mayo de 2013** (mes anterior al pago del retroactivo).

INTERESES MORATORIOS							
PERIODO		No	RESOL.	%	% DIARIA	VALOR	INTERÉS
DE	HASTA	días	No	CORRIENTE	MORA	CAPITAL*	MORA
14-oct-11	31-oct-11	18	1684	19,39%	0,06997%	\$31.602.725,44	\$398.023,25
01-nov-11	30-nov-11	30	1684	19,39%	0,06997%	\$31.602.725,44	\$663.372,09
01-dic-11	31-dic-11	31	1684	19,39%	0,06997%	\$31.602.725,44	\$685.484,49
01-ene-12	31-ene-12	31	2336	19,92%	0,07165%	\$31.602.725,44	\$701.975,92
01-feb-12	29-feb-12	29	2336	19,92%	0,07165%	\$31.602.725,44	\$656.687,15
01-mar-12	31-mar-12	31	2336	19,92%	0,07165%	\$31.602.725,44	\$701.975,92
01-abr-12	14-abr-12	14	465	20,52%	0,07355%	\$31.602.725,44	\$325.398,12
SUBTOTAL							\$4.132.916,94
21-jun-12	30-jun-12	10	465	20,52%	0,07355%	\$31.602.725,44	\$232.427,23
01-jul-12	31-jul-12	31	984	20,86%	0,07461%	\$31.602.725,44	\$730.978,78
01-ago-12	31-ago-12	31	984	20,86%	0,07461%	\$31.602.725,44	\$730.978,78
01-sep-12	30-sep-12	30	984	20,86%	0,07461%	\$31.602.725,44	\$707.398,82
01-oct-12	31-oct-12	31	1528	20,89%	0,07471%	\$31.602.725,44	\$731.899,28
01-nov-12	30-nov-12	30	1528	20,89%	0,07471%	\$31.602.725,44	\$708.289,63
01-dic-12	31-dic-12	31	1528	20,89%	0,07471%	\$31.602.725,44	\$731.899,28
01-ene-13	31-ene-13	31	2200	20,75%	0,07427%	\$31.602.725,44	\$727.600,92
01-feb-13	28-feb-13	28	2200	20,75%	0,07427%	\$31.602.725,44	\$657.187,93
01-mar-13	31-mar-13	31	2200	20,75%	0,07427%	\$31.602.725,44	\$727.600,92
01-abr-13	30-abr-13	30	605	20,83%	0,07452%	\$31.602.725,44	\$706.507,71

¹⁰ En el mismo sentido consultar Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, Magistrado Ponente SAMUEL JOSÉ RAMÍREZ POVEDA, sentencia del doce (12) de diciembre de dos mil dieciocho (2018), Proceso No. 11001-33-35-017-2015-00786-01, Demandante: Álvaro Moreno Rodríguez, Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP.

¹¹ De conformidad con lo dispuesto en el artículo 177, inciso 6° CCA

01-may-13	31-may-13	31	605	20,83%	0,07452%	\$31.602.725,44	\$730.057,97
SUBTOTAL							\$8.122.827,26
TOTAL INTERESES MORATORIOS							\$12.255.744,20

RESUMEN LIQUIDACIÓN INTERESES MORATORIOS		
Desde	Hasta	Valor
14/10/2011	14/04/2012	\$4.132.916,94
21/06/2012	31/05/2013	\$8.122.827,26
TOTAL		\$12.255.744,20

No obstante, se encuentra acreditado dentro del plenario, que en el momento en que la entidad efectuó el pago de mesadas atrasadas e indexación, incluyó un monto por concepto de intereses moratorios, por la suma de **\$5.912.952**, de acuerdo a la documental que obra en los folios 38 a 41 y el archivo digital "05.RESPUESTA REQUERIMIENTO.pdf", por lo que el Despacho lo tomará como un pago parcial al valor adeudado por concepto de intereses moratorios, esto es, que dicho valor se restará del total arrojado en la liquidación antes expuesta, así:

Intereses moratorios	\$12.255.744,20
Pago parcial	\$5.912.952
Total adeudado	\$6.342.792,2

Por tanto, se impartirá aprobación a la liquidación antes expuesta, al encontrarse ajustada a lo legalmente ordenado en las Sentencias base de ejecución, y previsto en los pronunciamientos ya señalados.

De esta manera, la liquidación del crédito arroja a favor de la ejecutante, señora **LUCY OMAIRA GARZÓN DE CASTAÑEDA**, un total de **SEIS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON DOS CENTAVOS (\$6.342.792,2)**.

Con fundamento en lo anteriormente expuesto, el **JUZGADO SÉPTIMO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ. D.C. –SECCIÓN SEGUNDA-**,

RESUELVE

PRIMERO: MODIFICAR la liquidación del crédito, presentada por la parte ejecutante, de acuerdo a la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: APROBAR la liquidación elaborada por este Despacho, en la suma de **SEIS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON DOS CENTAVOS (\$6.342.792,2)**, a favor de la ejecutante, señora **LUCY OMAIRA GARZÓN DE CASTAÑEDA**, identificada con cédula de ciudadanía No. 41.514.838.

TERCERO: Conminar a las partes para que, en todo caso, adelanten sin demora las gestiones pertinentes a fin de dar cumplimiento a la presente providencia, en especial, al representante legal de la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, habida cuenta que tanto el inciso 7° del artículo 192, como parágrafo 1° *in fine* del artículo 195 de la Ley 1437 de 2011, advierten perentoriamente a las autoridades sobre la responsabilidad penal, disciplinaria, fiscal y patrimonial que acarrea el incumplimiento de las disposiciones sobre los créditos judicialmente reconocidos.

CUARTO: En firme este proveído, por Secretaría envíese copia de esta providencia al representante legal de la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, para los efectos legales pertinentes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

La Juez,

GUERTI MARTÍNEZ OLAYA

ECB

<p>JUZGADO</p> <p>7</p> <p>ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ</p>	<p>POR ANOTACIÓN EN ESTADO ELECTRÓNICO</p> <p>NO. <u>076</u></p> <p>DE FECHA: <u>17 DE SEPTIEMBRE DE 2021</u></p> <p>SE NOTIFICA A LAS PARTES, LA PROVIDENCIA ANTERIOR LA SECRETARIA</p> <p> </p>
--	--

Firmado Por:

Guerti Martinez Olaya
Juez Circuito
Sala 007 Contencioso Admsección 2
Juzgado Administrativo
Bogotá D.C., - Bogotá, D.C.

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:

d691179ae43e3fe9412db08ac267b1ddb5ca29620f375d8978999d1fe93ba91b

Documento generado en 16/09/2021 10:49:22 AM

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>

REPUBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL

JUZGADO SÉPTIMO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ -
SECCIÓN SEGUNDA

AUTO INTERLOCUTORIO No. 473

Septiembre dieciséis (16) de dos mil veintiuno (2021)

REFERENCIA: Exp. EJECUTIVO No. 11001-3335-007-2017-00521-00
EJECUTANTE: LUCY OMAIRA GARZÓN DE CASTAÑEDA
EJECUTADO: NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO

En atención a la solicitud de medidas cautelares, el Despacho ordenó, previo a decretar el embargo de las cuentas bancarias de la ejecutada, oficiar a los Bancos BANCOLOMBIA S.A, DAVIVIENDA S.A, BANCO POPULAR y BBVA S.A., a fin de que informaran si la NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO, tenía dineros depositados en cuenta bancarias, y que pudieran ser objeto de embargo.

En cumplimiento a lo anterior, las referidas entidades bancarias, conforme a requerimientos efectuados por Autos emitidos el 22 de enero de 2021 y 5 de agosto del presente año, manifestaron lo siguiente:

Banco Popular:

Allegó escrito¹, manifestando que la NACION-MEN-FNPS, registra una cuenta, respecto de la cual aclara que “la cuenta en mención registra concurrencia de embargos y no posee saldo disponible”, aportando los comprobantes de las razones por las cuales es inembargable.

Banco BBVA S.A.:

Manifestó que el MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, maneja cuatro cuentas corrientes así:

CUENTA	DEFINICIÓN
310-000161	DTN- Fondos especiales Educación superior
310-001763	DTN – Gastos Generales
310-002571	Contribución Parafiscal Ley 21
310-002563	Ley 21

Informando, que a las cuentas 310-000161 y 310-001763 les llegan dineros consignados por el Ministerio de Hacienda.

¹ Ver folios 37 a 45

Así mismo anunció, que el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio posee unas cuentas que administra la Fiduciaria la Previsora, así:

Número de cuenta	Tipo de cuenta
311-00222-4	Corriente
311-01767-7	Corriente
311-15400-9	Ahorros
309-00442-2	Ahorros

Respecto a estas cuentas, **informó que las mismas gozan del beneficio de inembargabilidad, de acuerdo a comunicación emitida directamente por la Fiduciaria, indicándose la improcedencia de medidas cautelares sobre las mismas.**²

BANCOLOMBIA:

Allegó escrito, en el cual manifestó que el Ministerio de Educación Nacional no tiene vínculos financieros o comerciales con el Banco, lo que les impide hacer efectiva la medida decretada³.

DAVIVIENDA:

Indicó, que el Ministerio de Educación Nacional, registra como titular de las siguientes cuentas:

Tipo de Producto	No. de Producto	Fecha de apertura	Estado	Saldo al 18/02/2020
Cuenta Corriente Oficial sin Sobregiro	057769994013	03/05/2000	Embargo	\$0,31
Cuenta Corriente Oficial sin Sobregiro	0166269996921	27/02/1990	Embargo	\$3.925,74
Cuenta Corriente Oficial sin Sobregiro	166269996939	27/02/1990	Embargo	\$473,41
Cuenta Corriente Oficial sin Sobregiro	396169992163	26/02/1993	Embargo	\$1.896,81
Cuenta Corriente Oficial sin Sobregiro	473069996733	28/09/2001	Embargo	\$0,00
Cuenta Corriente Oficial sin Sobregiro	473069996774	03/05/2000	Embargo	\$4.286,01
Cuenta Corriente Oficial sin Sobregiro	473069996782	13/09/1994	Embargo	\$0,00
Cuenta Corriente Oficial sin Sobregiro	474469995838	14/06/2000	Embargo	\$0,04
Cuenta de Ahorros Damas - Oficial	266000192325	19/03/1997	Embargo	\$2.798,19
Cuenta de Ahorros Damas – Tradicional	266000089307	31/10/1997	Embargo	\$0,07
Cuenta de Ahorros Damas - Oficial	084700036449	13/05/1997	Embargo	\$17,44
Cuenta de Ahorros Damas - Oficial	457800011159	08/07/2005	Embargo	\$812,60

² Ver folio 49

³ Ver folio 57

Además, anexó **certificado en el cual consta que la naturaleza de los recursos de la mencionada entidad, se encuentran incorporados en el Presupuesto General de la Nación, adquiriendo por ende el carácter de inembargables**⁴.

Expuesto lo anterior, es necesario referirnos al contenido del artículo 594 del Código General del Proceso, aplicable por remisión del artículo 306 de la Ley 1437 de 2011, que enlista los bienes que no pueden ser objeto de embargo, disponiendo lo siguiente.

“ARTÍCULO 594. BIENES INEMBARGABLES. Además de los bienes inembargables señalados en la Constitución Política o en leyes especiales, no se podrán embargar:

1. Los bienes, las rentas y recursos incorporados en el Presupuesto General de la Nación o de las entidades territoriales, las cuentas del sistema general de participación, regalías y recursos de la seguridad social.

2. Los depósitos de ahorro constituidos en los establecimientos de crédito, en el monto señalado por la autoridad competente, salvo para el pago de créditos alimentarios.

3. **Los bienes de uso público** y los destinados a un servicio público cuando este se preste directamente por una entidad descentralizada de cualquier orden, o por medio de concesionario de estas; pero es embargable hasta la tercera parte de los ingresos brutos del respectivo servicio, sin que el total de embargos que se decreten exceda de dicho porcentaje.

Cuando el servicio público lo presten particulares, podrán embargarse los bienes destinados a él, así como los ingresos brutos que se produzca y el secuestro se practicará como el de empresas industriales.

(...)

PARÁGRAFO. Los funcionarios judiciales o administrativos se abstendrán de decretar órdenes de embargo sobre recursos inembargables. En el evento en que por ley fuere procedente decretar la medida no obstante su carácter de inembargable, deberán invocar en la orden de embargo el fundamento legal para su procedencia.

Recibida una orden de embargo que afecte recursos de naturaleza inembargable, en la cual no se indicare el fundamento legal para la procedencia de la excepción, el destinatario de la orden de embargo, se podrá abstener de cumplir la orden judicial o administrativa, dada la naturaleza de inembargable de los recursos. En tal evento, la entidad destinataria de la medida, deberá informar al día hábil siguiente a la autoridad que decretó la medida, sobre el hecho del no acatamiento de la medida por cuanto dichos recursos ostentan la calidad de inembargables. La autoridad que decretó la medida deberá pronunciarse dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de envío de la comunicación, acerca de si procede alguna excepción legal a la regla de inembargabilidad. Si pasados tres (3) días hábiles el destinatario no se recibe oficio alguno, se entenderá revocada la medida cautelar.

(...)” (Subrayado y negrilla del despacho)

De ahí que, en relación a los bienes públicos, unos son de uso público y otros son fiscales, siendo los primeros, aquellos destinados al uso del público, su goce y disfrute; y los segundos, corresponden al patrimonio de las entidades estatales, que contribuyen al desarrollo del giro ordinario de sus negocios o su operatividad, respecto de los cuales no tienen acceso de manera directa los particulares (artículos 63 y 72 de la Constitución de 1991 y 674 y 678 del Código Civil).

Frente al uso de estos bienes la H. Corte Constitucional ha indicado lo siguiente:

“BIENES DE USO PÚBLICO Y BIENES FISCALES-Distinción

La clasificación de los bienes estatales entre bienes de uso público y bienes fiscales viene dada inicialmente por el artículo 674 del Código Civil, el cual denomina a los primeros como “bienes de la Unión”, cuya característica principal es que pertenecen al dominio de la República. Seguidamente,

⁴ Ver archivo digital 04.RespuestaDAVIVIENDA.pdf

establece que cuando el uso de estos bienes pertenece a los habitantes de un territorio como las calles, plazas, puentes, etc., se llaman "bienes de la Unión de uso público" o "bienes públicos del territorio". Finalmente, cuando estos bienes se encuentran en cabeza del Estado, pero su uso no pertenece generalmente a los habitantes, se llaman "bienes fiscales" o, simplemente, "bienes de la Unión"

BIENES DE USO PUBLICO Y BIENES FISCALES-Protección legal y constitucional

Por estar bajo la tutela jurídica del Estado, los bienes de uso público y los bienes fiscales son objeto de protección legal frente a eventos en los cuales los particulares pretendan apropiarse de ellos. Es por ello que para evitar estas situaciones, la misma Carta Política señala en su artículo 63, que todos los bienes de uso público del Estado "son inalienables, inembargables e imprescriptibles", en razón a que están destinados a cumplir fines de utilidad pública en distintos niveles: los bienes de uso público tienen como finalidad estar a disposición de los habitantes del país de modo general y los bienes fiscales constituyen los instrumentos materiales para la operación de los servicios estatales. De este modo, al impedir que los particulares se apropien de los bienes fiscales, "se asegura o garantiza la capacidad fiscal para atender las necesidades de la comunidad"⁵

Conforme al anterior pronunciamiento, resulta procedente la inembargabilidad de los bienes del Estado, considerados de manera general, sin precisar las excepciones al respecto.

Además de lo expuesto, el Decreto 111 de 1996⁶ en su artículo 19, estableció la inembargabilidad de las rentas incorporadas al Presupuesto General de la Nación, así como las cesiones y participaciones de que trata la Constitución de 1991 (arts. 356 a 364), consistentes en ingresos tributarios (impuestos directos e indirectos, art. 27 Decreto 111 de 1996) y no tributarios (las tasas y las multas art. 27 Decreto 111 de 1996) con excepción de los recursos de capital⁷ (art. 358 de la C.P.).

Sumado a ello, tampoco resultan embargables los recursos del Sistema General de Participaciones, del Sistema General de Regalías⁸ y de las rentas propias de destinación específica para el gasto social, conforme con los artículos 356 a 364 de la Constitución y el artículo 45 de la Ley 1551 de 2012.

Se precisa, que en el sector salud, son inembargables los bienes destinados para financiar el régimen subsidiado (artículo 275 parágrafo 2º de la Ley 1450 de 2011) y en materia pensional, todo lo referente a los recursos, tanto del régimen de prima media con prestación definida, como las cuentas de ahorro individual con solidaridad, fondos destinados al pago de seguros de invalidez y sobrevivencia, entre otras sumas destinadas a la financiación de ese sistema, conforme con el artículo 134 de la Ley 100 de 1993, lo que es reiterado por el artículo 594 del Código General del Proceso.

Frente al sector educativo a cargo de las entidades territoriales, el artículo 18 de la Ley 715 de 2001, prohibió la embargabilidad de los recursos de que se dispongan para ese sector, no obstante, el aparte normativo que hablaba de la medida de embargo, fue

⁵ Corte Constitucional, sentencia T-314 de 2012 con ponencia del Magistrado Dr. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.

⁶ "Por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 1994 y la Ley 225 de 1995 que conforman el estatuto orgánico del presupuesto".

⁷ Decreto 111 de 1996, que en Art. 31 indica textualmente lo siguiente: "Los recursos de capital comprenderán: los recursos del balance, los recursos del crédito interno y externo con vencimiento mayor a un año de acuerdo con los cupos autorizados por el Congreso de la República, los rendimientos financieros, el diferencial cambiario originado por la monetización de los desembolsos del crédito externo y de las inversiones en moneda extranjera, las donaciones, el excedente financiero de los establecimientos públicos del orden nacional y de las empresas industriales y comerciales del Estado del orden nacional, y de las sociedades de economía mixta con el régimen de aquéllas, sin perjuicio de la autonomía que la Constitución y la ley les otorga, y las utilidades del Banco de la República, descontadas las reservas de estabilización cambiaria y monetaria.

PARÁGRAFO. Las rentas e ingresos ocasionales deberán incluirse como tales dentro de los correspondientes grupos y subgrupos de que trata este artículo (L. 38/89, art. 21; L. 179/94, arts. 13 y 67)."

⁸ A su vez, el artículo 91 de la Ley 715 de 2001, reiteró la inembargabilidad de estos recursos. igualmente el Decreto Ley 028 de 2008, en su Art. 21, establece la embargabilidad de rentas de libre destinación para cubrir obligaciones laborales. Y también, la Ley 1530 de 2012 en su artículo 70 reitera la inembargabilidad de los recursos que conforman el Sistema en comentario.

revisado por la Corte Constitucional en sentencia C-793 de 2002 y declarado exequible condicionado, bajo el entendido que si es procedente su embargo, cuando se trate del cumplimiento de sentencias y conciliaciones sobre la materia.

También, la H. Corte Constitucional⁹, para procurar el cumplimiento de sentencias laborales, condicionó la exequibilidad del artículo 21 del Decreto Ley 28 de 2008, en el entendido que esos créditos podrán pagarse primeramente con los ingresos de libre destinación, pero agotadas estas, se pagaran con los recursos con destinación específica.

Por su parte, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo en el artículo 195, estableció también prohibición de medidas cautelares, sobre la destinación específica que realicen las entidades para el cumplimiento de sentencias judiciales y conciliaciones.

De acuerdo al marco normativo y jurisprudencial expuesto, resulta claro que existen claras restricciones sobre la embargabilidad de bienes públicos, luego para el decreto de estas medidas, es necesario que se tenga certeza de la procedencia de los recursos que se van a embargar, y para ello la Alta Corporación citada, ha indicado que se requiere de certificaciones emanadas de la Dirección General de Presupuesto o de la entidad misma, en aras de establecer la destinación de las cuentas bancarias y precaver embargos que no correspondan a los autorizados legalmente.

Al respecto, el H. Consejo de Estado, señaló:

“...Por otro lado, se advierte que no se encuentra acreditado que la cuenta No. 302-96125-5 del Banco Ganadero perteneciente al ÁREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA maneja recursos provenientes del Fondo Nacional de Regalías, de transferencias hechas por la Nación pues si bien es cierto, el Subgerente de la Gestión Operativa del Banco Ganadero en ese sentido lo certificó, para la Sala tal certificación no constituye una prueba idónea para tener certeza de la naturaleza de los recursos que alimentan esa cuenta, pues realmente quien está llamado a dar fe del origen de los dineros depositados en dichas cuentas es el Fondo Nacional de Regalías o el Director General de Presupuesto y no la entidad bancaria tal y como sucedió en éste caso...”¹⁰

En atención a lo anterior, y de acuerdo a lo manifestado por cada una de las entidades bancarias que fueron requeridas, el Despacho no dará trámite a la solicitud de la parte ejecutante, como quiera que las cuentas objeto de medida cautelar son de carácter inembargable, tal como quedó expuesto conforme a la normativa citada, al hacer parte del Presupuesto General de la Nación, del Sistema General de Participación y de recursos de seguridad social.

Bajo las anteriores consideraciones, procederá el Juzgado a negar la solicitud de medida cautelar solicitada, toda vez que no obra argumento que por Ley permita la procedencia del decreto de dicha medida, más aun cuando no ha quedado en firme el Auto que aprueba la correspondiente liquidación del crédito¹¹.

⁹ Corte Constitucional Sentencia C-1154 de 2008, con ponencia de la Magistrada Dra. Clara Inés Vargas Hernández.

¹⁰ Consejo de Estado Sección Tercera auto del 13 de marzo de 2006 con ponencia del CP Dr. Ramiro Saavedra Becerra, exp. 26566.

¹¹ Al respecto, puede consultarse el Auto del 16 de marzo de 2018, proferido por el H. Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección “C”, con ponencia del Magistrado, Dr. Carlos Alberto Orlando Jaiquel, dentro del expediente No. 11001333502820160009801

En consecuencia, el **JUZGADO SÉPTIMO ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ, SECCIÓN SEGUNDA,**

RESUELVE

Primero.- NEGAR la solicitud de medida cautelar obrante a folio 1, por lo expuesto en la parte motiva.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

La Juez,

GUERTI MARTÍNEZ OLAYA

ECB

<p>JUZGADO 7 ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ</p>	<p>POR ANOTACIÓN EN ESTADO ELECTRÓNICO NO. <u>076</u> DE FECHA: <u>17 DE SEPTIEMBRE DE 2021</u> SE NOTIFICA A LAS PARTES, LA PROVIDENCIA ANTERIOR LA SECRETARIA</p>
--	--

Firmado Por:

Guerti Martinez Olaya
Juez Circuito
Sala 007 Contencioso Adm sección 2
Juzgado Administrativo
Bogotá D.C., - Bogotá, D.C.

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **0d96583bbe6cb0f48ac681ff4e146b1876b1a04527afadc2a5599a767ba6cffd**
Documento generado en 16/09/2021 10:49:26 AM

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL

JUZGADO SÉPTIMO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL BOGOTÁ
SECCIÓN SEGUNDA

AUTO SUSTANCIACIÓN No. 964

Septiembre dieciséis (6) de dos mil veintiuno (2021)

REFERENCIA: Exp. NyR 11001-3335-007-2018-00387-00
DEMANDANTE: MARTHA YANETH RUIZ GARZÓN
DEMANDADO: NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN – FONDO
NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL
MAGISTERIO

Obedézcase y Cúmplase, lo dispuesto por el H. Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección A, que mediante Sentencia calendada del 21 de mayo de 2021 – M.P. Dr. José María Armenta Fuentes, dispuso confirmar el auto de fecha 30 de julio de 2019, por el cual se declaró no probadas las excepciones previas de ineptitud de la demanda y caducidad del medio de control.

En firme esta providencia, se ordena el ingreso del expediente al despacho, para fijar la fecha de continuación de audiencia inicial.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

La Juez,

GUERTI MARTÍNEZ OLAYA

DCRE

<p>JUZGADO 7 ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ</p>	<p>POR ANOTACIÓN EN ESTADO ELECTRÓNICO NO. 76 DE FECHA: 17 DE SEPTIEMBRE DE 2021 SE NOTIFICA A LAS PARTES, LA PROVIDENCIA ANTERIOR</p> <p>LA SECRETARIA</p>
---	--

Firmado Por:

**Guerti Martinez Olaya
Juez Circuito
Sala 007 Contencioso Admsección 2
Juzgado Administrativo
Bogotá D.C., - Bogotá, D.C.**

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:

d4ab00fc89fccff511b5ea6b69b114328bac5ac191750b8acac9dff0f406096d

Documento generado en 16/09/2021 08:26:16 AM

**Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>**

REPUBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL

JUZGADO SÉPTIMO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ -
SECCIÓN SEGUNDA

AUTO DE SUSTANCIACIÓN No. 958

Septiembre dieciséis (16) de dos mil veintiuno (2021).

REFERENCIA: Exp. EJECUTIVO No. 11001-3335-007-2018-00430-00
EJECUTANTE: ELVA MERY CHAVARRO ROMERO
EJECUTADO: NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN – FONDO NACIONAL DE
PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO

Revisado el expediente, el Despacho observa que:

Mediante auto de 12 de agosto de 2021, se ordenó a las partes dar cumplimiento al numeral quinto de la providencia de 22 de enero de 2021, y así mismo que informaran si se ha realizado pago alguno (fl. 94).

El 30 de agosto de 2021, la parte ejecutante señala el valor del crédito, tasándolo en la suma de \$2.412.899, e informa que la ejecutada no ha realizado pago alguno (fls. 95-98).

Sin embargo, aunque la parte señala el valor del crédito, se tiene que a la fecha no ha sido presentada la liquidación del crédito, necesaria para continuar con la siguiente etapa procesal, atendiendo los parámetros dispuestos en el artículo 446 del C.G.P., el cual establece claramente:

“ARTÍCULO 446. LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO Y LAS COSTAS. Para la liquidación del crédito y las costas, se observarán las siguientes reglas:

1. Ejecutoriada el auto que ordene seguir adelante la ejecución, o notificada la sentencia que resuelva sobre las excepciones siempre que no sea totalmente favorable al ejecutado cualquiera de las partes podrá presentar la liquidación del crédito con especificación del capital y de los intereses causados hasta la fecha de su presentación, y si fuere el caso de la conversión a moneda nacional de aquel y de estos, de acuerdo con lo dispuesto en el mandamiento ejecutivo, adjuntando los documentos que la sustenten, si fueren necesarios.

2. De la liquidación presentada se dará traslado a la otra parte en la forma prevista en el artículo 110, por el término de tres (3) días, dentro del cual sólo podrá formular objeciones relativas al estado de cuenta, para cuyo trámite deberá acompañar, so pena de rechazo, una liquidación alternativa en la que se precisen los errores puntuales que le atribuye a la liquidación objetada.

3. Vencido el traslado, el juez decidirá si aprueba o modifica la liquidación por auto que solo será apelable cuando resuelva una objeción o altere de oficio la cuenta respectiva. El recurso, que se tramitará en el efecto diferido, no impedirá efectuar el remate de bienes, ni la entrega de dineros al ejecutante en la parte que no es objeto de apelación.

4. De la misma manera se procederá cuando se trate de actualizar la liquidación en los casos previstos en la ley, para lo cual se tomará como base la liquidación que esté en firme." (Negrillas y subrayas fuera de texto).

Por lo que se ordena **REQUERIR a la parte ejecutante para que en el término de ocho (8) días**, siguientes a la notificación de esta providencia, allegue la correspondiente liquidación del crédito, en los términos específicos del numeral 1 del artículo 446 del C.G.P., esto es, en la forma allí dispuesta

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

La Juez,

GUERTI MARTÍNEZ OLAYA

DCRE

JUZGADO 7 ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ	POR ANOTACIÓN EN ESTADO ELECTRÓNICO NO. 76 DE FECHA: 17 DE SEPTIEMBRE DE 2021 SE NOTIFICA A LAS PARTES, LA PROVIDENCIA ANTERIOR LA SECRETARIA
---	--

Firmado Por:

**Guerti Martínez Olaya
Juez Circuito
Sala 007 Contencioso Admsección 2
Juzgado Administrativo
Bogotá D.C., - Bogotá, D.C.**

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:

95a06d32db078ed3df668c6c3cd284b304f2cf6fda010b26790a43427925f701

Documento generado en 16/09/2021 08:26:19 AM

**Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>**

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL

JUZGADO SÉPTIMO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL BOGOTÁ
SECCIÓN SEGUNDA

AUTO SUSTANCIACIÓN No. 985

Septiembre dieciséis (16) de dos mil veintiuno (2021).

REFERENCIA: Exp. NyR 11001-3335-007-2018-00541-00
DEMANDANTE: GILBERTO VARGAS AYALA
DEMANDADO: NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN – FONDO
NACIONAL PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO
FNPSM

Obedézcase y Cúmplase, lo dispuesto por el H. Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección F, que mediante Sentencia calendada del 16 de junio de 2021 – M.P. Dra. Patricia Salamanca Gallo, confirmó la Sentencia proferida por este Juzgado, el 30 de octubre de 2019, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

Téngase en cuenta que las copias solicitadas a folio 362 ya fueron expedidas como consta a folio 345A.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

La Juez,

GUERTI MARTÍNEZ OLAYA

DCRE

<p>JUZGADO 7 ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ</p>	<p>POR ANOTACIÓN EN ESTADO ELECTRÓNICO NO. 076 ESTADO DE FECHA: 17 DE SEPTIEMBRE DE 2021 SE NOTIFICA A LAS PARTES, LA PROVIDENCIA ANTERIOR</p> <p> LA SECRETARIA</p>
---	--

Firmado Por:

Guerti Martinez Olaya
Juez Circuito
Sala 007 Contencioso Admsección 2
Juzgado Administrativo
Bogotá D.C., - Bogotá, D.C.

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:
4abf8700fb14b728e290cc9388951cb65ca03ef8b4624da741504ce001cc6193
Documento generado en 16/09/2021 08:26:25 AM

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>

REPUBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL

JUZGADO SÉPTIMO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ
SECCIÓN SEGUNDA

AUTO DE SUSTANCIACIÓN No.987

Septiembre dieciséis (16) de dos mil veintiuno (2021)

REFERENCIA: Exp. N. R. No. 11001-3335-007-2018-00436-00
DEMANDANTE: JOHANNA PATRICIA SEGURA
DEMANDADO: SUBRED INTEGRADA SE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.R.

Revido el expediente se advierte que en archivo "14. RENUNCIA PODERE DDO" pdf. contiene renuncia presentada por la Dra. **CLAUDIA MILENA TRIANA ARANGUREN** quien funge como apoderada judicial de la entidad demandada **SUBRED INTEGRADA DE SERVISISO SE SALUD CENTRO ORIENTE. E.S.E.** Igualmente en archivo "16, RENUNCIA DTE" pdf., obra renuncia de poder del doctor **CARLOS JOSÉ MANSILLA JÁUREGUIC**, quien actúa en el presente asunto como apoderado de la parte demandante.

No obstante lo anterior, advierte el Despacho, que ninguna de las mencionadas renunciaciones cumple los requisitos previstos en el artículo 76 del Código General del Proceso; razón por la que se **REQUIERE** a los apoderados de las partes para que den cumplimiento a la norma en cita a efectos de que el Despacho se pronuncie sobre la aceptación de las mismas.

Para tal efecto, se concede el término de **CINCO (5) DÍAS.**

NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE,

La Juez,

GUERTI MARTÍNEZ OLAYA

luvo

<p>JUZGADO 7 ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ</p>	<p>POR ANOTACIÓN EN ESTADO ELECTRÓNICO NO. <u>076</u> DE FECHA: <u>17 DE SEPTIEMBRE DE 2021</u> SE NOTIFICA A LAS PARTES, LA PROVIDENCIA ANTERIOR LA SECRETARIA</p> <p> SECRETARIA</p>
--	--

Firmado Por:

Guerti Martinez Olaya
Juez Circuito
Sala 007 Contencioso Admsección 2
Juzgado Administrativo
Bogotá D.C., - Bogotá, D.C.

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:

259c61e8fb35c11b71d88a492b6ca4c7a8ec16d4d2333e11204e7d1a7e3a6b09

Documento generado en 16/09/2021 08:26:22 AM

**Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>**

REPUBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL

JUZGADO SÉPTIMO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ
SECCIÓN SEGUNDA

AUTO DE SUSTANCIACIÓN No. 988

Septiembre, dieciséis (16) de dos mil veintiuno (2021)

REFERENCIA: **Exp. N.R. No. 110013335007201900408-00**
DEMANDANTE: **RAJE GERARDO ROBERT MEDINA**
DEMANDADO: **SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.**

De la lectura del expediente se advierte que, agotadas las etapas anteriores, se encuentra pendiente de realizar **la Audiencia Inicial, de que trata el artículo 180 de la Ley 1437 de 2011, este Despacho, se dispone a fijar fecha, la cual se realizará de manera virtual**, atendiendo las disposiciones contenidas en la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia, artículo 95, según el cual, es deber del juez utilizar todos los medios técnicos, electrónicos, informáticos y telemáticos que se tiene a disposición, para el cumplimiento de sus funciones, y las previsiones contenidas en el artículo 103 del Código General del Proceso, el cual dispone, que en todas las actuaciones judiciales se debe procurar el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones en la gestión, y trámite de los procesos judiciales, con el fin de agilizar y propender por el acceso a la administración de justicia, además, de las directrices impartidas por el H. Consejo Superior de la Judicatura, y los diferentes Decretos del Gobierno Nacional, que propenden por favorecer el distanciamiento social, hasta tanto permanezca vigente la Emergencia Sanitaria ya declarada, a raíz del virus COVID-19, mediante la modalidad de trabajo en casa, utilizando las tecnologías de la información y las comunicaciones.

En consecuencia, señálese el día **VEINTIUNO (21)** del mes de **OCTUBRE** de **DOS MIL VEINTIUNO (2021)**, a las **9:45 a.m.**, para llevar a cabo la citada diligencia.

Se advierte a los apoderados que la asistencia a esta audiencia es obligatoria, so pena de dar aplicación del numeral 4 del artículo 180 del C.P.A.C.A.

Se remite copia del Protocolo a seguir, para la realización de la Audiencia fijada. Igualmente, se les hace saber, que una vez los apoderados den cumplimiento a lo ordenado en el numeral 15 del referido Protocolo, se les remitirá el link a través del cual podrán acceder a la sala virtual designada, y

el link por medio del cual podrán visualizar el expediente en medio digital, para lo pertinente.

Se requiere a los **apoderados de las partes**, a fin de que dos (2) días antes de la diligencia, se sirvan remitir al correo electrónico institucional, admin07bt@cendoj.ramajudicial.gov.co, **los poderes y/o sustituciones de los mismos**, junto con los anexos correspondientes, que acrediten la representación otorgada, en el evento de que requieran otorgar nuevo poder, o sustituir el mismo.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La Juez,

GUERTI MARTÍNEZ OLAYA

CAVO

JUZGADO 7 ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ	POR ANOTACIÓN EN ESTADO ELECTRÓNICO NO. 076 DE FECHA: 17 DE SEPTIEMBRE DE 2021 SE NOTIFICA A LAS PARTES, LA PROVIDENCIA ANTERIOR LA SECRETARIA
---	---

Firmado Por:

Guerti Martinez Olaya
Juez Circuito
Sala 007 Contencioso Admsección 2
Juzgado Administrativo
Bogotá D.C., - Bogotá, D.C.

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:

9be4c658d5f8306d74512d2adb381d318dfd6eb1a57a008114ef709b6044a80f

Documento generado en 16/09/2021 08:43:20 AM

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL

JUZGADO SÉPTIMO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL BOGOTÁ
SECCIÓN SEGUNDA

AUTO INTERLOCUTORIO CONSTITUCIONAL No. 268

Septiembre dieciséis (16) de dos mil veintiuno (2021)

REFERENCIA: Exp. TUTELA 11001-3335-007-2019-00198-00
ACCIONANTE: EULALIA RAYO ACOSTA
ACCIONADO: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA
ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS

Obedézcase y Cúmplase, lo dispuesto por el H. Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Primera – Subsección “B”, que mediante sentencia calendada del 21 de junio de 2019, M.P. Moisés Rodrigo Mazabel Pinzón, revocó la sentencia de 17 de mayo de 2019, que declaró la carencia actual de objeto por hecho superado y en su lugar tuteló el derecho fundamental de petición, ordenando a la accionada a dar una respuesta completa y congruente con la solicitud de 11 de marzo de 2019.

Así mismo, **Obedézcase y Cúmplase**, lo dispuesto por la H. Corte Constitucional, que mediante auto de 19 de noviembre de 2019, excluyó de revisión la tutela de la referencia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

La Juez,

GUERTI MARTÍNEZ OLAYA

DCRE

<p>JUZGADO 7 ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ</p>	<p>POR ANOTACIÓN EN ESTADO ELECTRÓNICO NO. 76 DE FECHA: 17 DE SEPTIEMBRE DE 2021 SE NOTIFICA A LAS PARTES, LA PROVIDENCIA ANTERIOR</p> <p>LA SECRETARIA</p>
---	--

Firmado Por:

Guerti Martinez Olaya
Juez Circuito
Sala 007 Contencioso Admsección 2
Juzgado Administrativo
Bogotá D.C., - Bogotá, D.C.

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:
22c1399522d77e5e7303bb55dee112fc968d8510031c7b727a3b7e37527c366d
Documento generado en 16/09/2021 08:42:29 AM

Valide este documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>

REPUBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL

JUZGADO SÉPTIMO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ
SECCIÓN SEGUNDA

AUTO DE SUSTANCIACIÓN No. 988

Septiembre dieciséis (16) de dos mil veintiuno (2021)

REFERENCIA: Exp. N. R. No. 11001-3335-007-2019-00074-00
DEMANDANTE: NINFA LUCRECIA CAMELO GARCIA
DEMANDADO: SUBRED INTEGRADA SE SERVICIOS DE SALUD SUROCCIDENTE E.S.E.

Por Auto del 21 de abril de 2021, el Despacho procedió a requerir a la entidad demandada a fin de que se sirviera remitir lo siguiente:

1. Certificación en la que se indiquen los periodos en los que la señora NINFA LUCRECIA CAMELO GARCÍA (C.C. 52.277.666) prestó sus servicios en la modalidad de prestación de servicios, **aportando copia de los contratos suscritos por ésta y el entonces HOSPITAL PABLO VI E.S.E. hoy SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.**

2. Copia de los contratos suscritos entre el entonces HOSPITAL PABLO VI E.S.E. hoy SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E. y la Cooperativa de Trabajo Asociado NUSIL CTA entre el 1º de septiembre de 2005 y el 31 de junio de 2009, precisando si la demandante hizo parte del personal de enfermería a través del cual dicho tercero prestó sus servicios asistenciales.

3. Copia completa de los cronogramas de actividades y turnos de los que hizo parte la señora NINFA LUCRECIA CAMELO GARCÍA (C.C. 52.277.666) como AUXILIAR DE ENFERMERÍA y ENFERMERA PROFESIONAL, durante el periodo comprendido entre el 1º de septiembre de 2005 y el 31 de octubre de 2017, mediante contratos de prestación de servicios suscritos directamente y a través de terceros (cooperativas).

4. Certificación acerca de los pago de aportes a seguridad social realizados por la señora NINFA LUCRECIA CAMELO GARCÍA (C.C. 52.277.666), entre 1º de septiembre de 2005 y el 31 de octubre de 2017. En relación con ésta prueba, como quiera que son documentos que posiblemente están en poder de la demandante, también se le requiere para que se sirva allegarlos.

En cumplimiento de lo anterior, la entidad demandada allegó el link que contendría la carpeta contractual de la demandante; Relación de las actividades de enfermería, y los contratos entre el Hospital Pablo VI de Bosa, e igualmente allega certificación de los contratos suscritos con la demandante y de obligaciones contractuales, lo anterior obra en la carpeta **"08. RESPUESTA AREQUERIMIENTO pdf" del expediente digital. No obstante lo anterior se observa que el link enviado al Despacho no direcciona a ninguna URL que contenga los documentos o la información solicitada;** por ello, se requiere al apoderado de la entidad demandada para que en el término de ocho (8) días, contados a partir de la notificación de la presente providencia,

remita nuevamente los links verificando su contenido, para garantizar el recaudo probatorio decretado.

NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE,

La Juez,

GUERTI MARTÍNEZ OLAYA

LAVO

JUZGADO 7 ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ	POR ANOTACIÓN EN ESTADO ELECTRÓNICO NO. <u>076</u> DE FECHA: <u>17 DE SEPTIEMBRE DE 2021</u> SE NOTIFICA A LAS PARTES, LA PROVIDENCIA ANTERIOR LA SECRETARIA
---	--

Firmado Por:

**Guerti Martinez Olaya
Juez Circuito
Sala 007 Contencioso Admsección 2
Juzgado Administrativo
Bogotá D.C., - Bogotá, D.C.**

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:

**fd6e25acf151a961e2470d287a257c3cb14091d915f54381aba43758750ea95
b**

Documento generado en 16/09/2021 08:42:51 AM

**Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>**

**REPUBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL**

**JUZGADO SÉPTIMO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ
SECCIÓN SEGUNDA**

AUTO DE SUSTANCIACIÓN No. 993

Septiembre dieciséis (16) de dos mil veintiuno (2021)

REFERENCIA: Exp. N. R. No. 11001-3335-007-2019-00118-00

DEMANDANTE: NELIDA MANCIPE TORO

DEMANDADO: HOSPITAL MILITAR CENTRAL

Por Secretaría, póngase en conocimiento de las partes en este proceso, las pruebas allegadas con Oficio Radicado E-00003-202102695-HMC Id: 131991, del 12 de abril de 2021, obrantes en la carpeta 27. Respuesta a Requerimiento del expediente digital, para que en el término de TRES (3) DÍAS, de conformidad con lo dispuesto en el inciso final del artículo 173 del Código General del Proceso, en concordancia con el artículo 110 ibídem, realicen las manifestaciones que consideren pertinentes.

Vencido dicho término, si no existe inconformidad alguna, mediante auto, se incorporarán formalmente al proceso las referidas pruebas, y sin que por lo tanto, el Despacho considere necesario, fijar nueva fecha para continuar la audiencia de pruebas, con el mismo fin. Además, se correrá traslado común a las partes para que presenten sus alegatos finales o de conclusión, y si a bien lo tiene el Ministerio Público presente el respectivo concepto.

NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE,

La Juez,

GUERTI MARTÍNEZ OLAYA

LAVO

JUZGADO 7 ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ	POR ANOTACIÓN EN ESTADO ELECTRÓNICO NO. <u>076</u> DE FECHA: <u>17 DE SEPTIEMBRE DE 2021</u> SE NOTIFICA A LAS PARTES, LA PROVIDENCIA ANTERIOR LA SECRETARIA SECRETARIA
---	--

Firmado Por:

**Guerti Martinez Olaya
Juez Circuito**

Sala 007 Contencioso Admsección 2
Juzgado Administrativo
Bogotá D.C., - Bogotá, D.C.

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:

da4126d0f1385c7b9226dd8970faf94e6dcb7725b33ff81bc70301e775890cc7

Documento generado en 16/09/2021 08:42:58 AM

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>

REPUBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL

JUZGADO SÉPTIMO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ
D.C., SECCIÓN SEGUNDA

AUTO INTERLOCUTORIO No. 481

Septiembre dieciséis (16) de dos mil veintiuno (2021)

REFERENCIA: Exp. A. E. No. 11001-3335-007-2019-00320-00
EJECUTANTE: HUGO EFRÉN OROZCO PARDO
EJECUTADO: ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES -
COLPENSIONES

Agotado el trámite de la instancia, procede el Despacho a dictar la providencia contemplada en el artículo 440 del Código General del Proceso, en razón a que la entidad ejecutada contestó la demanda de manera extemporánea.

I. ANTECEDENTES

El señor **HUGO EFRÉN OROZCO PARDO**, a través de apoderado judicial, promovió Acción Ejecutiva contra la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES**, para obtener el pago de unas sumas de dinero, relacionadas con diferencias de mesadas no pagadas, indexación e intereses moratorios, a los que se refieren las pretensiones de la demanda, causados en cumplimiento al fallo proferido al interior del proceso de Nulidad y Restablecimiento del Derecho No. 11001-3335-007-2012-00155-00¹.

Como fundamento de sus peticiones, expuso en los hechos de la demanda, que en la Sentencia de primera instancia proferida por este Juzgado, el 12 de septiembre de 2013, dentro del referido proceso de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, se condenó a la **Administradora Colombiana de Pensiones - COLPENSIONES**, a reliquidar y pagar a la señora Blanca Cecilia Pérez Méndez, la pensión de jubilación, en cuantía equivalente al 75% de todos los factores salariales devengados durante el último año de servicio, conforme a la certificación obrante en el folio 20 de dicho expediente.

El ejecutante anexa petición de cumplimiento de fallo, radicada el 26 de febrero de 2014, No. 2014-1594918², la cual fue resuelta a través de la Resolución No. GNR 149820 del 23 de mayo de 2016, por la cual COLPENSIONES reliquidó la pensión de jubilación de la señora Blanca Cecilia Pérez Méndez, que fue reconocida a favor del señor Hugo Efrén Orozco Pardo, como cónyuge supérstite, en cumplimiento a lo ordenado por este Despacho³, no obstante, según su manifestación no se le pagó en debida forma los montos ordenados en la sentencia objeto de cobro judicial.

¹ Ver páginas 63 y 64 del expediente digital

² Ver página 19 del expediente digital

³ Ver páginas 21 a 29 del expediente digital

Por lo anterior, solicitó librar mandamiento de pago a su favor por las siguientes sumas:

“a. Por la suma de OCHENTA Y UN MILLONES CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS DIECISÉIS PESOS CON 49/100, o la suma que resulte demostrada, por concepto de diferencias de mesadas no pagadas, liquidadas desde el 10 DE JULIO DE 2010 al 30 de agosto de 2018.

b. Por las diferencias de las mesadas causadas desde la presentación de la demanda y hasta cuando se liquide la pensión en la forma ordenada en el fallo judicial.

c. Por la suma de OCHO MILLONES CUATROCIENTOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN PESOS CON 22/100, por concepto de indexación de las sumas adeudadas desde el 11 DE JULIO DE 2010 al 30 de septiembre de 2018.

d. Por las diferencias de la indexación que se causa desde la presentación de la demanda hasta cuando se liquide la pensión en la forma ordenada en el fallo judicial.

e. CIENTO VEINTICUATRO MILLONES OCHOCIENTOS DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS, por concepto de intereses moratorios calculado sobre el valor de las diferencias de mesadas adeudadas desde el 11 DE julio de 2 al 31 de enero de 2018.

f. Por los intereses moratorios que se causen desde la presentación de la demanda y hasta el día que se liquide la pensión en la forma ordenada en el fallo judicial.
(...)”⁴ (Sic)

II. ACTUACIÓN PROCESAL

El Despacho, en análisis de las sumas determinadas en la demanda y especialmente frente a las solicitadas en el acápite de pretensiones de la misma, procedió a confrontarlas con las canceladas por la Administradora Colombiana de Pensiones - COLPENSIONES, mediante Resolución No. GNR 149820 del 23 de mayo de 2016, razón por la cual, previos requerimientos a la entidad ejecutada⁵, por Auto del 28 de enero de 2021⁶, se libró mandamiento de pago, por las sumas pretendidas y por los periodos solicitados.

Dispuesta la notificación ordenada en el auto que libró el mandamiento de pago, la misma fue enviada personalmente a la ejecutada ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES, el 4 de marzo de 2021, conforme a las constancias secretariales visibles en la carpeta del expediente digital denominada “02.NOTIFICACION AUTO LIBRA MANDAMIENTO”, sin embargo, dicha entidad, como se observa en el archivo digital “03.EXCEPCIONES AL MANDAMIENTO DE PAGO.pdf”, presentó contestación de la demanda ejecutiva el 26 de marzo de 2021, cuando el término para allegar dicho escrito, venció el 23 de marzo del presente año, razón por la cual, se tiene que fue presentada de manera extemporánea.

CONSIDERACIONES

No se observa causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado hasta el momento. Tampoco hay reparo alguno que se advierta, en cuanto a los denominados presupuestos procesales.

En efecto, se trata de un asunto de los consagrados en el artículo 297 de la Ley 1437 de 2011, cuyo procedimiento se encuentra regulado por el artículo 298 ibídem, en concordancia con el artículo 422 y sig. del Código General del Proceso, asunto

⁴ Ver páginas 63 y 64 del expediente digital

⁵ Autos del 24 de febrero de 2020 y 6 de julio de 2020

⁶ Ver páginas 113 a 120 del expediente digital

atribuido para su conocimiento a los Juzgados Administrativos, de acuerdo a lo dispuesto por el numeral 7 del artículo 155 de la mencionada Ley.

Así mismo, la capacidad de los contendientes para ser parte y comparecer se encuentra plenamente acreditada. La demanda reúne los requisitos básicos que la habilitan como instrumento idóneo para la conformación de la relación jurídica procesal.

Se aportó con la demanda, la primera copia auténtica que presta mérito ejecutivo de la Sentencia del 12 de septiembre de 2013, emitida por este Juzgado, documento que reúne a cabalidad los requisitos especiales del artículo 297 de la Ley 1437 y del artículo 422 del Código General del Proceso, aplicable por remisión del artículo 306 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

La ejecutada, pese a ser notificada de manera personal del mandamiento ejecutivo, no ejerció oportunamente su derecho de contradicción, por lo que no existen excepciones de fondo o de mérito pendientes por resolver, siendo procedente aplicar lo ordenado por el inciso 2º del artículo 440 de la Ley 1564 de 2012, que dispone sobre la orden de seguir adelante la ejecución.

Respecto de la pretensión de **condena en costas**, el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, adicionado por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021, dispone sobre la condena en costas cuando se establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal. Así entonces, el referido artículo 188 de la Ley en cita, ordena pronunciarse sobre la condena en costas, y que su liquidación y ejecución se regirá por las normas del Código de Procedimiento Civil, hoy Código General del Proceso – C.G.P., pero no necesariamente ésta debe ser en forma condenatoria, ya que la última disposición aplica solo para su tasación y cobro, pero no para establecer el criterio de la condena en costas. Es así que, el artículo 365, numeral 8º del C.G.P., establece que sólo habrá lugar a costas, cuando en el expediente aparezcan que se causaron y en la medida de su comprobación⁷.

Al respecto, en pronunciamiento emitido por el H. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”, M.P. Dr. Carmelo Perdomo Cuéter, Sentencia del 19 de julio de 2019⁸, se dispuso:

“(…) En ese orden, la referida norma especial que regula la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-administrativo dispone:

Artículo 188. Condena en costas. *Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil”*

Por consiguiente, esta Sala considera que la referida normativa deja a disposición del juez la procedencia o no de la condena en costas, puesto que para ello debe examinar la actuación procesal de la parte vencida y comprobar su causación y no el simple hecho de que las resultas del proceso le fueron desfavorables a sus intereses, pues dicha imposición surge después de tener certeza de que la conducta desplegada por aquella comporta temeridad o mala fe, por lo que, al no predicarse tal proceder de la parte demandante, no se impondrá condena en costas”. (Negrillas y subrayas del Despacho)

⁷ Consejo de Estado, Sentencia del 26 de enero de 2017, Rad. 68001233300020140027801, No. Interno 2801-2015, C.P. Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez. Sentencia de Unificación CE-SUJ-SII-2018 del 18 de julio de 2018.

⁸ Consejo de Estado, Sentencia del 19 de julio de 2019, M.P. Dr. Carmelo Perdomo Cuéter, Exp. 76001-23-33-000-2013-00042-01, Demandante, Clara Inés León de González, Demandado, Universidad del Valle.

En el caso que nos ocupa, no existe prueba que desvirtúe la presunción de buena fe de la entidad ejecutada, ni es posible afirmar que haya incurrido en conductas temerarias o dilatorias dentro del trámite procesal, por lo que no hay lugar a la condena de costas a la Administradora Colombiana de Pensiones - COLPENSIONES.

En mérito de lo expuesto, el **JUZGADO SÉPTIMO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ, D.C., -SECCIÓN SEGUNDA-**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia, y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO.- ORDENAR SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, para el cumplimiento de las obligaciones determinadas en el mandamiento ejecutivo.

SEGUNDO.- En virtud de lo dispuesto en el artículo 213 de la Ley 1437 de 2011, y antes de tramitar la liquidación del crédito, por la Secretaría del Despacho, se deberá **REQUERIR** a la Administradora Colombiana de Pensiones – COLPENSIONES, para que certifique si a la fecha, efectuó pagos por concepto de diferencias de mesadas atrasadas, indexación e intereses moratorios, éstos últimos, en virtud de la Resolución No. GNR 149820 del 23 de mayo de 2016.

TERCERO.- PRACTICAR la liquidación del crédito conforme al artículo **446 de la Ley 1564 de 2012**, teniendo en cuenta lo dispuesto en el ordinal segundo y tercero de la parte resolutive de la presente providencia.

Las sumas de dinero que se arrojen, luego de las operaciones aritméticas, se limitarán, en todo caso, a las pretensiones de la demanda.

CUARTO: No se condena en costas, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

La Juez,

GUERTI MARTÍNEZ OLAYA

ECB

<p>JUZGADO 7 ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ</p>	<p>POR ANOTACIÓN EN ESTADO ELECTRÓNICO NO. <u>076</u> DE FECHA: <u>17 DE SEPTIEMBRE DE 2021</u> SE NOTIFICA A LAS PARTES, LA PROVIDENCIA ANTERIOR LA SECRETARIA</p> <p>LIETH ISABEL PINEDA GARZÓN ANEXO DEL TRÁM SECRETARIA</p>
---	--

Firmado Por:

Guerti Martinez Olaya
Juez Circuito

Sala 007 Contencioso Admsección 2
Juzgado Administrativo
Bogotá D.C., - Bogotá, D.C.

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **008afa1520a504136e56997646c1069c87ca2b051157875aed17c4d12c638bae**

Documento generado en 16/09/2021 10:49:29 AM

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL

JUZGADO SÉPTIMO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL BOGOTÁ
SECCIÓN SEGUNDA

AUTO INTERLOCUTORIO CONSTITUCIONAL No. 280

Septiembre dieciséis (16) de dos mil veintiuno (2021).

REFERENCIA: Exp. TUTELA 11001-3335-007-2019-00379-00
DEMANDANTE: TERESA ALARCÓN DE TORRES
DEMANDADO: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA
PROSPERIDAD SOCIAL – SECRETARÍA DISTRITAL DE
HÁBITAT – UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA
ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS
UARIV – FONDO NACIONAL DE VIVIENDA.

Obedézcase y Cúmplase, lo dispuesto por el H. Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección E, que mediante sentencia calendada del 6 de noviembre de 2019 – M.P. Dra. Patricia Victoria Manjarrés Bravo, confirmó parcialmente, la sentencia proferida por este juzgado el 24 de septiembre de 2019, modificando el ordinal segundo y confirmando en lo demás la sentencia impugnada.

Así mismo, **Obedézcase y Cúmplase**, lo dispuesto por la H. Corte Constitucional, que mediante auto de 31 de enero de 2020, excluyó de revisión el expediente de la referencia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

La Juez,

GUERTI MARTÍNEZ OLAYA

DCRE

<p>JUZGADO 7 ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ</p>	<p>POR ANOTACIÓN EN ESTADO ELECTRÓNICO NO. 076 ESTADO DE FECHA: 17 DE SEPTIEMBRE DE 2021 SE NOTIFICA A LAS PARTES, LA PROVIDENCIA ANTERIOR</p> <p>LA SECRETARIA</p>
---	--

Firmado Por:

Guerti Martinez Olaya
Juez Circuito
Sala 007 Contencioso Admsección 2

Juzgado Administrativo
Bogotá D.C., - Bogotá, D.C.

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:

9f9a810284190186b36aef893af58ec329aae00b97728c9db36f53750ea1a75f

Documento generado en 16/09/2021 08:43:04 AM

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL

JUZGADO SÉPTIMO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL BOGOTÁ
SECCIÓN SEGUNDA

AUTO INTERLOCUTORIO CONSTITUCIONAL No. 282

Septiembre dieciséis (16) de dos mil veintiuno (2021).

REFERENCIA: Exp. TUTELA 11001-3335-007-2019-00420-00
DEMANDANTE: JACQUELINE DEL SOCORRO VILLAREAL GUZMÁN
DEMANDADO: COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL – UNIVERSIDAD LIBRE.
SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA – SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO (VINCULADOS)

Obedézcase y Cúmplase, lo dispuesto por la H. Corte Constitucional, que mediante auto de 31 de enero de 2020, excluyó de revisión el expediente de la referencia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

La Juez,

GUERTI MARTÍNEZ OLAYA

DCRE

<p>JUZGADO 7 ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ</p>	<p>POR ANOTACIÓN EN ESTADO ELECTRÓNICO NO. 076 ESTADO DE FECHA: 17 DE SEPTIEMBRE DE 2021 SE NOTIFICA A LAS PARTES, LA PROVIDENCIA ANTERIOR</p> <p>LA SECRETARIA</p>
---	--

Firmado Por:

Guerti Martinez Olaya
Juez Circuito
Sala 007 Contencioso Admsección 2
Juzgado Administrativo
Bogotá D.C., - Bogotá, D.C.

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:

2d819ba8e7c947e2531d8f0fdd416416aa632988b6ed50bf77c80ef5431236ba

Documento generado en 16/09/2021 08:42:34 AM

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL

JUZGADO SÉPTIMO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL BOGOTÁ
SECCIÓN SEGUNDA

AUTO INTERLOCUTORIO CONSTITUCIONAL No. 284

Septiembre dieciséis (16) de dos mil veintiuno (2021).

REFERENCIA: Exp. TUTELA 11001-3335-007-2019-00422-00
DEMANDANTE: DAGOBERTO GONZÁLEZ GUZMÁN
DEMANDADO: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN
Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS UARIV.

Obedézcase y Cúmplase, lo dispuesto por la H. Corte Constitucional, que mediante auto de 31 de enero de 2020, excluyó de revisión el expediente de la referencia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

La Juez,

GUERTI MARTÍNEZ OLAYA

DCRE

<p>JUZGADO 7 ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ</p>	<p>POR ANOTACIÓN EN ESTADO ELECTRÓNICO NO. 076 ESTADO DE FECHA: 17 DE SEPTIEMBRE DE 2021 SE NOTIFICA A LAS PARTES, LA PROVIDENCIA ANTERIOR</p> <p>LA SECRETARIA</p>
---	--

Firmado Por:

Guerti Martinez Olaya
Juez Circuito
Sala 007 Contencioso Admsección 2
Juzgado Administrativo
Bogotá D.C., - Bogotá, D.C.

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:

18265b9e15a57a9f6d5aff78c9490995be01bb0a01559ae25b4e296f2fb6872c

Documento generado en 16/09/2021 08:43:08 AM

**Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>**

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL

JUZGADO SÉPTIMO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL BOGOTÁ
SECCIÓN SEGUNDA

AUTO INTERLOCUTORIO CONSTITUCIONAL No. 281

Septiembre dieciséis (16) de dos mil veintiuno (2021).

REFERENCIA: Exp. TUTELA 11001-3335-007-2019-00424-00
DEMANDANTE: LUIS ANTONIO GALEANO ROMERO
DEMANDADO: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN
Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS UARIV.

Obedézcase y Cúmplase, lo dispuesto por la H. Corte Constitucional, que mediante auto de 31 de enero de 2020, excluyó de revisión el expediente de la referencia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

La Juez,

GUERTI MARTÍNEZ OLAYA

DCRE

JUZGADO 7 ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ	POR ANOTACIÓN EN ESTADO ELECTRÓNICO NO. 076 ESTADO DE FECHA: 17 DE SEPTIEMBRE DE 2021 SE NOTIFICA A LAS PARTES, LA PROVIDENCIA ANTERIOR LA SECRETARIA
--	--

Firmado Por:

Guerti Martinez Olaya
Juez Circuito
Sala 007 Contencioso Admsección 2
Juzgado Administrativo
Bogotá D.C., - Bogotá, D.C.

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:

72ebe02a4c9e5e9b4eeadb61cb541c38bc4112e93e29e239a033e366635ff47a

Documento generado en 16/09/2021 08:43:11 AM

**Valide este documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>**

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL

JUZGADO SÉPTIMO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL BOGOTÁ
SECCIÓN SEGUNDA

AUTO INTERLOCUTORIO CONSTITUCIONAL No. 283

Septiembre dieciséis (16) de dos mil veintiuno (2021).

REFERENCIA: Exp. TUTELA 11001-3335-007-2019-00433-00
DEMANDANTE: ENELDA CRISTINA OROZCO RÁNGEL
DEMANDADO: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN
Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS UARIV.

Obedézcase y Cúmplase, lo dispuesto por la H. Corte Constitucional, que mediante auto de 31 de enero de 2020, excluyó de revisión el expediente de la referencia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

La Juez,

GUERTI MARTÍNEZ OLAYA

DCRE

JUZGADO 7 ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ	POR ANOTACIÓN EN ESTADO ELECTRÓNICO NO. 076 ESTADO DE FECHA: 17 DE SEPTIEMBRE DE 2021 SE NOTIFICA A LAS PARTES, LA PROVIDENCIA ANTERIOR LA SECRETARIA
--	--

Firmado Por:

Guerti Martinez Olaya
Juez Circuito
Sala 007 Contencioso Admsección 2
Juzgado Administrativo
Bogotá D.C., - Bogotá, D.C.

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:

99f7982b5bbe0cea491cddb0a4c2f6984002a3e63f46bb2235695d106f2437c3

Documento generado en 16/09/2021 08:42:41 AM

**Valide este documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>**

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL

JUZGADO SÉPTIMO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL BOGOTÁ
SECCIÓN SEGUNDA

AUTO INTERLOCUTORIO CONSTITUCIONAL No. 285

Septiembre dieciséis (16) de dos mil veintiuno (2021).

REFERENCIA: Exp. TUTELA 11001-3335-007-2019-00437-00
DEMANDANTE: HUGO FERNANDO BENAVIDES
DEMANDADO: MINISTERIO DE DEFENSA

Obedézcase y Cúmplase, lo dispuesto por la H. Corte Constitucional, que mediante auto de 31 de enero de 2020, excluyó de revisión el expediente de la referencia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

La Juez,

GUERTI MARTÍNEZ OLAYA

DCRE

<p>JUZGADO 7 ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ</p>	<p>POR ANOTACIÓN EN ESTADO ELECTRÓNICO NO. 076 ESTADO DE FECHA: 17 DE SEPTIEMBRE DE 2021 SE NOTIFICA A LAS PARTES, LA PROVIDENCIA ANTERIOR</p> <p> </p> <p>LA SECRETARIA</p>
---	---

Firmado Por:

Guerti Martinez Olaya
Juez Circuito
Sala 007 Contencioso Admsección 2
Juzgado Administrativo
Bogotá D.C., - Bogotá, D.C.

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:
6f0cd9345c1934c74db0725a7e81396b4ab14b6b6757aa3bdc8aa296bf90e2d
Documento generado en 16/09/2021 08:43:15 AM

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL

JUZGADO SÉPTIMO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ,
D.C., SECCIÓN SEGUNDA

AUTO DE SUSTANCIACIÓN No. 994

Septiembre (16) de dos mil veintiuno (2021)

REFERENCIA: Exp. N. R. 11001-3335-007-2019-00484-00
DEMANDANTE: MYRIAM GONZALEZ DE FORERO
DEMANDADO: NACIÓN-MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL-FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO-FIDUPREVISORA – SECRETARIA DE EDUCACION DE BOGOTA.
ASUNTO: ARTÍCULO 175 —PARÁGRAFO 1º— DEL C.P.A.C.A. – EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO

Examinado el expediente de la referencia, se advierte que la parte demandada, no aportó los antecedentes administrativos de los actos demandados. En consecuencia, se les requiere de manera urgente, para que en aplicación del artículo 175 —parágrafo 1º— de la Ley 1437 de 2011, y en el **término de cinco (5) días**, alleguen los referidos antecedentes, dentro de los cuales se deberá adjuntar:

-Por parte del MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL-FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO Y SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL, los antecedentes administrativos correspondientes a la demandante, señora, **MYRIAM, GONZALEZ DE FORERO** identificada con cédula de ciudadanía No. 41.648.805.

-Por parte de la FIDUPREVISORA, copia de los extractos de pago, en donde consten los valores recibidos por nómina y los descuentos realizados sobre la mesadas adicionales, por concepto de aportes al régimen de seguridad social en salud, realizados sobre la pensión de jubilación por aportes reconocida a la demandante, hasta la fecha.

Una vez la entidad demandada cumpla lo ordenado, **ingrésese de manera inmediata, el expediente al Despacho para dar continuidad con el trámite.**

Será la Secretaría del Despacho quien tramitará los oficios ordenados. En su contenido deberá advertirse a la autoridad requerida, sobre su deber de colaborar con la Administración de Justicia, y que en consecuencia, la respuesta al

requerimiento de este Despacho deberá ser suministrada **SIN DILACIÓN ALGUNA, so pena de incurrir en desacato judicial, y en mala conducta por obstrucción a la justicia, tal como lo dispone el artículo 60A de la Ley 270 de 1996,** toda vez que se trata de documentales que obran en su poder.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La Juez,

GUERTI MARTÍNEZ OLAYA

JUZGADO 7 ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ	POR ANOTACIÓN EN ESTADO NO. <u>076</u> DE FECHA: <u>17 DE SEPTIEMBRE DE 2021</u> SE NOTIFICA A LAS PARTES, LA PROVIDENCIA ANTERIOR LA SECRETARIA
---	--

Firmado Por:

Guerti Martínez Olaya

Juez Circuito

Sala 007 Contencioso Admsección 2

Juzgado Administrativo

Bogotá D.C., - Bogotá, D.C.

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:

5754ed7d85c16fbbc2da2692052baa1b7c038f950f12ec0eac9cd283dc8ccbc7

Documento generado en 16/09/2021 08:42:45 AM

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:

<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>

REPUBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL

JUZGADO SÉPTIMO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ
SECCIÓN SEGUNDA

AUTO ORDINARIO DE SUSTANCIACIÓN No. 1008

Septiembre dieciséis (16) de dos mil veintiuno (2021)

REFERENCIA: Exp. N.R. No. 11001-3335-007-2021-00249-00
DEMANDANTE: JORGE ERNESTO PÁEZ MÉNDEZ
DEMANDADA: NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
ASUNTO: DECLARACIÓN DE IMPEDIMENTO – PRIMA ESPECIAL ART. 14
LEY 4 DE 1992

El señor **JORGE ERNESTO PÁEZ MÉNDEZ**, identificado con la cédula de ciudadanía No. . 19.387.733, en ejercicio del Medio de Control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, impetró demanda en contra de la NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, pretendiendo se declare la nulidad del acto administrativo contenido en el oficio con radicado No. 20215920004121 del 23 de abril del 2021, expedido por la Fiscalía General de la Nación, mediante el cual se le negó al demandante, el reconocimiento y pago de la prima especial mensual del 30% del salario básico, prevista en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992.

Como consecuencia de lo anterior, solicita a título de restablecimiento del derecho, entre otras pretensiones, que se condene a la Nación-Fiscalía General de la Nación, a reconocer y pagar desde cuando adquirió el derecho, es decir, desde la posesión en el cargo de fiscal y en adelante mientras permanezca vinculado y que por razón el cargo tenga derecho, a la prima especial mensual equivalente al 30% del salario básico, prevista en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, como agregado, adición o incremento a la remuneración básica mensual que hasta el 31 de diciembre de 2020 no se le ha reconocido, ni pagado.

De conformidad con lo anterior la suscrita advierte, que se encuentra incurso en causal de impedimento, que es necesario declarar.

Al respecto, se ha de considerar que a través de la Ley 4° de 1992, se determinó:

“ARTÍCULO 14. El Gobierno Nacional establecerá una prima no inferior al 30% ni superior al 60% del salario básico, sin carácter salarial para los Magistrados de todo orden de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, Agentes del Ministerio Público delegados ante la Rama Judicial y para los Jueces de la República, incluidos los Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar, Auditores de Guerra y Jueces de Instrucción Penal Militar, excepto los que opten por la escala de salarios de la Fiscalía General de la Nación, con efectos a partir del primero (1o.) de enero de 1993. Igualmente tendrán derecho a la prima de que trata el presente artículo, los delegados departamentales del Registrador Nacional del Estado Civil, los Registradores del Distrito Capital y los niveles Directivo y

Asesor de la Registraduría Nacional del Estado Civil. PARÁGRAFO. Dentro del mismo término revisará el sistema de remuneración de funcionarios y empleados de la Rama Judicial sobre la base de la nivelación o reclasificación atendiendo criterios de equidad”.(Negrilla del Despacho)

El artículo 130 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, dispone:

“Artículo 130. Causales. Los magistrados y jueces deberán declararse impedidos, o serán recusables, en los casos señalados en el artículo 141 del Código General del Proceso y, además, en los siguientes eventos:(...)” (Negrilla fuera de texto)

A su turno, el artículo 141 del Código General del Proceso, señala:

“Artículo 141. Causales de recusación. Son causales de recusación las siguientes:

1. Tener el juez, su cónyuge o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, interés directo o indirecto en el proceso (...)” (Negrilla fuera de texto)

Por su parte, el Código Único Disciplinario, consagrado en la Ley 734 de 2002, al regular el régimen aplicable a los funcionarios de la Rama Judicial, establece en el artículo 196 qué constituye falta disciplinaria, así:

“Artículo 196. Falta disciplinaria. Constituye falta disciplinaria y da lugar a acción e imposición de la sanción correspondiente el incumplimiento de los deberes y prohibiciones, la incursión en las inhabilidades, impedimentos, incompatibilidades y conflictos de intereses previstos en la Constitución, en la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia y demás leyes. Constituyen faltas gravísimas las contempladas en este código.” (Negrilla fuera de texto).

Bajo el anterior marco normativo, la suscrita considera que se encuentra incurso en la causal de impedimento establecida en el numeral 1° del artículo 141 del C.G.P., toda vez que el asunto a dilucidar, versa sobre el pago de la prima especial de servicios del 30%, establecida en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, y que constituirá factor salarial para efectos de reliquidar todas las prestaciones sociales, salariales y laborales del demandante.

Considero importante resaltar el pronunciamiento de la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de Estado¹, en un caso donde se discutía también el carácter salarial de unos factores que devengan Magistrados y Fiscales Delegados ante aquellos en el cual **rectificaron su posición sobre el tema**, orientación que me lleva a replantear mi posición, y así respetuosamente proponer mi impedimento, por los mismos argumentos:

“(...) Encontrándose el proceso para decidir el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la Fiscalía General de la Nación, los suscritos Consejeros

¹ Del 27 de septiembre de 2018, publicado en estado del 7 de diciembre de 2018, Radicación número: 25000-23-42-000-2016-03375-02 (2369-18). Consejera ponente: Sandra Lisset Ibarra Vélez. Actor: Martha Lucía Olano Guzmán. Demandado: Fiscalía General de la Nación.

encuentran que se presenta una de las causales de impedimento previstas en el Código General del Proceso para conocer del presente asunto, por cuanto **pese a que dentro del sub lite, a través de auto del 19 de octubre de 2017, se declaró infundado el impedimento manifestado por los Magistrados del Tribunal Administrativo de Cundinamarca** en tanto la demandante es beneficiaria del régimen salarial especial de la Fiscalía General de la Nación contemplado en el Decreto 53 de 1993², **dicha postura se replanteará en esta oportunidad procesal, por las razones que pasan a exponerse:**

7. Lo pretendido por la demandante es el reconocimiento de la prima especial de servicios y la bonificación por compensación como factor salarial, a efectos de que se ordene la reliquidación de sus prestaciones sociales con base en dichos emolumentos y la correspondiente indexación.

8. Ahora bien, como se expuso, la actora está regulada por el régimen especial de la Fiscalía General de la Nación, en cuyo artículo 4º *ibídem* contempló la denominada «prima especial, sin carácter salarial»; por consiguiente, se encuentra contemplada en una disposición diferente a aquella que contempló dicho emolumento para los magistrados, entre otros, del Consejo de Estado, pues de ello se ocupó el legislador a través del artículo 15 de la Ley 4ª de 1992³.

9. **De lo anterior, se extrae que si bien una y otra prima especial se encuentran reguladas en instrumentos normativos diferentes, lo cierto es que el objeto de discusión en este proceso es el carácter salarial del porcentaje devengado a título de prima especial de servicios, que no ha sido tenido en cuenta para la liquidación de las prestaciones sociales, lo que podría conllevar a un beneficio para los Magistrados que integran esta Corporación.**

(...)

La intervención como jueces de conocimiento, afectaría la posición de neutralidad que debe caracterizar al funcionario judicial. El interés indirecto que tiene el conjunto de magistrados en la actuación judicial, hace que no se preserve la idoneidad suficiente que podría llevar a alterar el juicio de los funcionarios, restándole eficacia a los atributos de independencia, equilibrio e imparcialidad que deben determinar la función judicial.” (Resaltado fuera del texto original)

De ahí, que con ocasión al cambio de postura en la controversia relacionada con la prima especial, por el Máximo Órgano de lo Contencioso Administrativo, y que venía siendo adoptado en los impedimentos que declaraba el H. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, negado por los mismos argumentos que se negaba a los Jueces, pongo a consideración de mi Superior Funcional, la decisión de apartarme del conocimiento del presente asunto, a fin de buscar que la actuación

² «Por el cual se dictan normas sobre el régimen salarial y prestacional para los servidores públicos de la Fiscalía General de la Nación y se dictan otras disposiciones.»

³ «Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública y para la fijación de las prestaciones sociales de los Trabajadores Oficiales y se dictan otras disposiciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literales e) y f) de la Constitución Política.

[...]

ARTÍCULO 15. Los Magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte Constitucional, del Consejo de Estado, el Procurador General de la Nación, el Contralor General de la República, el Fiscal General de la Nación, el Defensor del Pueblo y el Registrador Nacional del Estado Civil tendrán una prima especial de servicios, ~~sin carácter salarial~~, que sumada a los demás ingresos laborales, igualen a los percibidos en su totalidad, por los miembros del Congreso, sin que en ningún caso los supere. El Gobierno podrá fijar la misma prima para los Ministros del Despacho, los Generales y Almirantes de la Fuerza Pública.» Aparte tachado INEXEQUIBLE

quede blindada contra cualquier cuestionamiento, destacando a su vez un reciente pronunciamiento donde esta última Corporación declaró fundado el impedimento relacionado con el caso de autos, en los siguientes términos:

“En consecuencia, los Jueces Administrativos del Circuito Judicial de Bogotá podrían estar incurso en la causal de impedimento consagrada en el numeral 1° del art. 141 del CGP y con fundamento en las providencias anteriores, por el presente se declara el impedimento para conocer del presente proceso.

Lo dicho toda vez que, la prima especial del 30% del salario básico mensual sin carácter salarial consagrada en el artículo 14 de la Ley 4a de 1992, también fue estipulada para los Magistrados de todo orden de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, de los Jueces de la República, de los Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar, los Auditores de Guerra y Jueces de Instrucción Penal, por lo que es evidente que al Juez Veinticinco le asiste un interés indirecto en cuanto al objeto del debate planteado en el proceso de la referencia.”⁴ (Negrilla fuera de texto).

Ahora bien, a través del CPACA, se estableció un trámite especial para los impedimentos de los Jueces Administrativos, de la siguiente forma:

“Artículo 131. Trámite de los impedimentos. Para el trámite de los impedimentos se observarán las siguientes reglas:

1. El juez administrativo en quien concurra alguna de las causales de que trata el artículo anterior deberá declararse impedido cuando advierta su existencia, expresando los hechos en que se fundamenta, en escrito dirigido al juez que le siga en turno para que resuelva de plano si es o no fundado y, de aceptarla, asumirá el conocimiento del asunto; si no, lo devolverá para que aquel continúe con el trámite. Si se trata de juez único, ordenará remitir el expediente al correspondiente tribunal para que decida si el impedimento es fundado, caso en el cual designará el juez ad hoc que lo reemplace. En caso contrario, devolverá el expediente para que el mismo juez continúe con el asunto.

2. Si el juez en quien concurra la causal de impedimento estima que comprende a todos los jueces administrativos, pasará el expediente al superior expresando los hechos en que se fundamenta. De aceptarse el impedimento el tribunal designará conjuez para el conocimiento del asunto. (...).”

Conforme las normas antes señaladas, el proceso debe ser enviado al que sigue en turno, con el fin de que este decida si asume el conocimiento o lo devuelve, sin embargo, atendiendo las disposiciones del Acuerdo PCSJA21-11765 del 11 de marzo de 2021, el Consejo Superior de la Judicatura, creó un juzgado de carácter transitorio para la sección segunda de los Juzgados Administrativos de Bogotá que conoce este tipo de controversias, por lo que el expediente se enviará al Juzgado Administrativo Transitorio Primero del Circuito Judicial de Bogotá D.C., para que decida lo pertinente frente al impedimento manifestado y lo de su competencia.

⁴ Sala Plena del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, providencia del 8 de abril de 2019, expediente No. 110013335025201900098-01, con ponencia de la Magistrada, Doctora Amparo Navarro López.

Así las cosas, el **JUZGADO SÉPTIMO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ D.C., SECCIÓN SEGUNDA,**

RESUELVE

PRIMERO: Declarar el impedimento individual del Juzgado 7 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, para conocer y tramitar el presente asunto, por las razones expuestas.

SEGUNDO: Por Secretaría, remítanse las presentes diligencias al Juzgado 3 Administrativo Transitorio del Circuito Judicial de Bogotá D.C., para que decida sobre el impedimento manifestado en esta providencia.

NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE,

La Juez

GUERTI MARTÍNEZ OLAYA

DCRE

<p>JUZGADO 7 ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ</p>	<p>POR ANOTACIÓN EN ESTADO ELECTRÓNICO NO. 76 ESTADO DE FECHA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2021 SE NOTIFICA A LAS PARTES, LA PROVIDENCIA ANTERIOR</p> <p>LA SECRETARIA</p>
---	--

Firmado Por:

**Guerti Martínez Olaya
Juez Circuito
Sala 007 Contencioso Admsección 2
Juzgado Administrativo
Bogotá D.C., - Bogotá, D.C.**

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:

bd9260fe57183c01d18dd58497e076b7277998939853ef08ad09dad6ff55f394

Documento generado en 16/09/2021 11:11:17 AM

**Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>**